

Almería, 2012, p. 5, citando a M. García, *Formación del profesorado para el cambio educativo*, Barcelona, EUB, 1995, pp. 174-175.

[41] *Ibid.*, p. 7.

[42] Byung-Chul Han, *Psicopolítica*, cit., p. 65.

[43] *Ibid.*, p. 66. Aquí podemos encontrar la diferencia esencial entre las metas de una educación vista desde la «inteligencia emocional» (¡incluso llegando a proponerla como asignatura!) y las que derivan de proponer una «educación sentimental» en la que el conocimiento de la tradición artística y literaria serían fundamentales para poder hablar en serio de una «educación en valores».

[44] *Ibid.*, p. 70.

[45] Barbara Ehrenreich, *Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo*, Madrid, Turner, 2011, p. 106.

[46] Habría mucho que reflexionar sobre los cambios que introduce pasar de considerarse «ciudadano del Reino de España» (por ejemplo) a tratarse de hecho, más bien, como «emprendedor de la “marca” España».

[47] Byung-Chul Han, *Psicopolítica*, cit., p. 71.

[48] <<https://www.youtube.com/watch?v=XKid0hBJw8M>>.

[49] Cfr. M. Ruiz Paz, *Los límites de la educación*, Madrid, Unisón, 1999. Especialmente recomendable a este respecto es el capítulo «Motivación y autoestima» (pp. 165 a 173).

[50] <<http://educaposit.blogspot.com.es/>>.

CAPÍTULO VI

La Universidad: el paisaje después de la batalla

El proceso de destrucción del sistema de enseñanza pública se aceleró vertiginosamente en la Universidad, a partir de la revolución educativa planteada con el pretexto de la Convergencia Europea ligada al Plan Bolonia. Es otro aspecto de la misma trituradora neoliberal que está deteriorando nuestra sanidad y nuestra escuela pública, empujándonos a un abismo que para otros ha sido siempre esa norma a la que llamamos tercer mundo. Una escuela pública para todos y todas, gratuita y concebida como un derecho ciudadano hasta los estudios superiores en la Universidad, esta es la idea que de pronto ha comenzado a resultar inaceptable y utópica. Todo hace temer que, dentro de poco tiempo, el panorama habrá cambiado tanto que no será fácil recordar qué es lo que había antes del desastre. Y más difícil aún será identificar las causas por las que todo se vino abajo, así como todos los malentendidos, las mentiras y los sofismas que han acompañado a esta devastación.

En este capítulo vamos a comentar algunos aspectos de este proceso en referencia a la Universidad, diagnosticando lo que en esencia nos parece un retroceso de la Ilustración y un regreso al feudalismo medieval.

¿SIGUE HACIENDO FALTA UNA UNIVERSIDAD?

En el año 2015, algunas juntas de facultad de las universidades públicas comenzaron el curso enfrentadas a un dilema inquietante. Algunas nuevas normativas decían que las facultades podrían autorizar o no a que cuatro artículos publicados en revistas «científicas» pudieran ser presentados como una tesis doctoral. Como los artículos pueden venir firmados por varios autores, una misma publica-

ción podría equivaler así no a una, sino a seis o siete cuartas partes de una tesis doctoral. Desde entonces, algunos profesores se han rasgado las vestiduras ante lo que consideran un despropósito, recordando cosas muy elementales en el mundo académico de antaño (es decir, en el mundo, digamos, «prebolonia»): un doctor es la autoridad académica más alta que existe. La única palabra que en la Universidad vale más que la palabra de un doctor es la palabra de dos o más doctores discutiendo entre sí *en público* (no en el salón de su casa). Y de hecho, la columna vertebral de una universidad debería ser la continua discusión de los doctores entre sí. Por eso, no se accede al grado de doctor más que enfrentándose a un tribunal de otros cinco doctores, en un acto público en el que puede entrar cualquier ciudadano que pase por ahí.

Por supuesto, se trata del mismo proceso de flexibilización de todas las titulaciones que ya hemos observado en la enseñanza primaria y secundaria para adaptarlas a las demandas siempre cambiantes de una sociedad inestable y suicida. En suma, se busca, como se suele decir, favorecer la empleabilidad. Y la idea de que, en una sociedad como la nuestra, haya un ejército de doctorandos que «emplean su tiempo» al tranquilo ritmo de una tesis doctoral, que a veces puede llegar a tomarse diez o quince años de investigación, aparece así como una ocurrencia delirante e ineficiente. Una vez que se han flexibilizado las antiguas licenciaturas, dinamizándolas en grados y másteres de pocos años de duración, los doctorados a la antigua usanza son obviamente dinosaurios abocados a la extinción.

Pero ¿qué tiene de malo –se dice– todo este esfuerzo por favorecer la empleabilidad de nuestros egresados universitarios? ¿Por qué despertó tantas alarmas el Plan Bolonia si de lo que se trataba era de adaptar la Universidad a las necesidades del mercado laboral? ¿Acaso no se estudia para encontrar trabajo? ¿No es lógico que las titulaciones universitarias se amolden a las demandas laborales, sobre todo cuando estas han cambiado tanto y tan profundamente

en los últimos tiempos?

El viejo catálogo de titulaciones –esto no ha cesado de repetirse– tenía un problema fundamental: la sobrecualificación. El diagnóstico es inquietante y puede parecer paradójico, pero también se presenta como realista. La gente termina la carrera *sabiendo demasiado* y eso no es bueno para encontrar trabajo. Se sabe demasiada física, demasiadas matemáticas, demasiada biología. Se aprende mucho latín, mucha lingüística o mucha historia. Pero el mercado laboral hace ya mucho que no necesita tanta sabiduría. Las titulaciones, en general, son ineficientes para el mercado, porque prometen lo que el mercado no está en condiciones de ofrecer: que un matemático trabaje como matemático, un biólogo como biólogo, un físico como un físico. En otros tiempos se podía esperar que un lingüista fuera profesor de lengua, o un licenciado en filosofía, profesor de filosofía, uno en historia, profesor de historia. Pero el deterioro mismo de la escuela pública en primaria y secundaria hace que esto tampoco sea ya una buena idea. La sociedad misma ya no necesita que la gente en general sepa tanta historia o tanta filosofía, de modo que tampoco hacen falta tantos profesores dedicados a ello.

Las empresas no necesitan licenciados que sepan mucho de una cosa, necesitan una buena disposición para adaptarse a lo que sea, como sea, donde sea, con el sueldo que sea. Estar dispuesto a trabajar los domingos, a hacer horas extras, a viajar a donde te manden, a no vivir en ningún sitio fijo, sin pretensiones de vida familiar o de estabilidad, estar dispuesto a aprender lo que haga falta para cuando haga falta (lo que hemos visto llamar pomposamente «aprendizaje a lo largo de toda la vida»), aceptar con resignación el perder el contrato y el volver a ser contratado a un ritmo imprevisible y caótico, poseer sentido de la disciplina, de la sumisión, de lealtad a la empresa, todas estas y algunas otras son cualidades que el mundo empresarial necesita imperiosamente para los egresados universitarios: no que sepan mucha física, muchas matemáticas o mucha lingüística.

Por eso, lo primero ha sido la fragmentación y la dispersión de las titulaciones. Es el mismo proceso de jibarización de los contenidos que llevamos observando en todos los niveles educativos. Había que romper con los itinerarios rígidos y prolongados, con las grandes y largas avenidas de las licenciaturas. Se trataba de que cada estudiante pudiera forjarse su propio currículum, diseñando su perfil laboral. Un estudiante puede decidir hacer un grado de Economía y luego un posgrado de Periodismo para especializarse como analista económico en algún periódico. Formarse luego haciendo prácticas en algún medio de comunicación, hacer un curso de Informática, pagarse años más tarde un título propio que le especialice en noticias internacionales o hacer un posgrado de Filosofía a distancia, para adquirir un poco de cultura general, etcétera.

Lo ideal, como hemos visto en el capítulo III, sería que, en lugar de títulos académicos para poner en un marco a la antigua usanza, los estudiantes poseyesen una especie de tarjeta de crédito en cuya banda magnética se fuesen registrando los másteres, cursos, prácticas, etc., que van completando su currículum, es decir, sus «competencias y destrezas» adquiridas. En lugar de títulos que definan carreras académicas y profesiones, habrá «carnés de competencias» individualizados.

Ya hemos comprobado antes que los objetivos de tanta individualización y flexibilización tienen que ver con una imposición de la patronal. En los documentos internos de la patronal europea (y también en la OCDE) se lleva barajando esta posibilidad desde los años setenta[1]. Se trata, en suma, de conseguir romper con la lógica sindical de las negociaciones colectivas y con la fuerza negociadora de los colegios profesionales. A la patronal le conviene extraordinariamente una individualización de los salarios. Su objetivo es hacerse con un inmenso ejército de graduados flexibles y dóciles, obligados a negociar individualmente sus salarios y sus condiciones laborales. Se trata –y no se disimula nada al respecto– de sustituir a la antigua

clase de los trabajadores, organizada políticamente en colegios y sindicatos, por una masa de «emprendedores» que ingrese en el mercado laboral sin protección sindical alguna. El proyecto supone un retroceso al capitalismo salvaje del siglo XIX, una retirada de las más elementales conquistas laborales que tantas décadas costó institucionalizar. Respecto a la Universidad, como vamos a comprobar en seguida, el retroceso ha ido mucho más allá, hacia un oscuro Medioevo de corte feudal.

A largo plazo, las titulaciones universitarias podrían volverse completamente obsoletas y ser por completo sustituidas por un «carné de competencias» medido cuantitativamente en créditos ECTS, de modo que cada aspirante a entrar en el mercado laboral tuviera que negociar en solitario y representarse tan solo a sí mismo. En realidad, como ya viene siendo anunciado en algunos documentos de la ANECA, la «entrevista de trabajo» propia del mundo empresarial es infinitamente más informativa (para el empleador, por supuesto), que todos los testimonios académicos registrados en los expedientes y titulaciones:

La entrevista se considera absolutamente fundamental e imprescindible en la selección de personal. Proporciona a los empresarios una visión general de, sobre todo, las actitudes y predisposición al trabajo del entrevistado. Es destacable este aspecto, pues más allá de los conocimientos técnicos, lo que preocupa verdaderamente son atributos como la disponibilidad: son habituales las quejas entre las empresas de actitudes consideradas inauditas por parte de los demandantes de empleo, como conocer con antelación a su incorporación el horario de trabajo, el salario o el periodo de vacaciones. Los comentarios relativos a esas cuestiones son interpretados como síntomas de escasa disponibilidad y poca motivación hacia el trabajo. Descartada la experiencia, es la predisposición al trabajo (en forma de responsabilidad, disponibilidad, espíritu de sacrificio, disciplina, aceptación de la autoridad, fácil inclusión en los grupos, etc.) lo que más se valora con diferencia; y la ausencia de esta buena pre-

disposición está considerada como algo bastante general (aunque lógicamente con excepciones), culpando de ello, no solo a la universidad, sino también al sistema educativo en su conjunto, la familia, la sociedad actual y nuestro estilo de vida desde la infancia[2].

Nos encontramos aquí con un efecto muy llamativo de la lógica empresarial para la gestión de la vida universitaria. El sistema de oposiciones y concursos, sostenido en último término por la garantía de la publicidad y el sorteo de los miembros del tribunal, ya se ha prácticamente extinguido. Y en su lugar, se cantan las excelencias del modelo de entrevista de trabajo habitual en el mercado laboral basura, según los cánones de la gestión empresarial. Salta a la vista el naufragio académico que puede suponer una reforma emprendida con estos principios. Se trata de una lógica abyecta que destruirá toda dignidad de la Universidad, obligándola a prostituirse hasta límites inimaginables.

Pero es que, además, se trata de una apuesta suicida. El resultado no será un mayor acceso de los egresados universitarios al mundo laboral, sino una mayor degradación de sus condiciones humanas. Si los actuales licenciados no encuentran trabajo no es porque la Universidad esté mal, sino porque el mercado laboral está mal. Si no hay trabajo es porque no hay trabajo, no porque los egresados estén «sobrecualificados».

Un estudiante que curse un grado de Economía, un máster de Periodismo y un cursillo de Power Point no sabrá ni Economía, ni Periodismo, ni Informática. Será un profesional flexible para un mercado laboral basura. Y eso ha sido, en realidad, el proyecto secreto que se escondía bajo la máscara de la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se anunciaba tras las reformas del Plan Bolonia: el intento desesperado y suicida de adaptar la Universidad a un mercado laboral basura. El resultado será, por supuesto, una Universidad basura. Es un experimento que no puede salir bien, un intento patético e impotente para intentar vanamente

adaptarse a un mercado anárquico e ingobernable, en perpetua mutación.

A largo plazo el experimento será también suicida para las empresas, porque ninguna sociedad puede prosperar adecuadamente habiendo dinamitado su sistema de instrucción pública y sus estudios superiores.

Pero a corto plazo, las empresas tienen mucho que ganar. El resultado será un ejército de trabajadores semicualificados sin ningún poder de negociación laboral. El resultado será, también, un ejército de becarios trabajando para las empresas y que, sin embargo, serán pagados con el dinero de los impuestos (cuando no con becas-crédito que luego los propios trabajadores tendrán que reembolsar). El mundo al revés: los trabajadores pagarán por trabajar y suplicarán para que se les deje hacerlo. Desdichadamente, esto es ya una realidad.

Y mientras tanto –todo hay que decirlo– las élites profesionales que sigan necesitando las empresas se formarán en las universidades privadas a precios prohibitivos.

Hay que decir que la demolición de la Universidad ha contado con la complicidad de las autoridades académicas (de izquierdas y de derechas) y con la pasividad irresponsable de la mayor parte de su personal docente (además de con algunos vociferantes calumniadores, como Félix de Azúa). Solo el movimiento estudiantil, para qué recordarlo, salió desde el principio en defensa de la institución universitaria. Por eso, asquea notar ahora cierta perplejidad ante dilemas como el que hemos mencionado respecto al doctorado. Cuatro artículos conceden ahora el título de doctor, un título que antes se conseguía con el trabajo, a menudo, de toda una vida académica. Algunos ponen cara de indignación ante este supuesto despropósito, sin advertir que el verdadero escollo está en otro sitio: las normativas dan un plazo de *tres años* para realizar la tesis doctoral. Esto quiere decir que se espera que una persona sea doctor con cuatro

años de grado y tres de doctorado (reconociéndose, además, que el primer año de grado es puramente un refuerzo de un bachillerato que en España se consideró demasiado cojo para la Convergencia Europea). Antes de la aplicación del Plan Bolonia, el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), una especie de equivalente de las antiguas «tesinas», se realizaba con cinco años de licenciatura y dos de doctorado (y, a veces, uno más, que normalmente se utilizaba en hacer el trabajo). Es decir que, en buena lógica, lo que habría que pedir es que, retroactivamente, concedieran el título de doctor a todos los diplomados que cursaron el DEA. O visto desde otro punto de vista: en verdad, los futuros doctores *ya no serán verdaderos doctores*. El tribunal que los tendrá que juzgar será cada vez más un trámite a extinguir, ya que las todas las agencias de evaluación conceden más valor a la evaluación ciega y anónima de las revistas científicas (que a algunos les parece muy objetiva, pero que a otros nos recuerda a los encapuchados que juzgaban en las mazmorras de la Santa Inquisición en tiempos oscuros todavía preilustrados) que a la discusión expuesta a la luz pública de los tribunales académicos.

En todo caso, no hay nada más tonto que no reconocer una derrota. Si la tesis hay que hacerla en tres años, es una tontería intentar empotrar ahí algo más que ochenta páginas (cuatro artículos). Hay que resignarse, sencillamente, a que la reforma de las universidades –eso que se llamó Bolonia– ha suprimido el título de doctor y lo ha sustituido por otra cosa que se va a llamar igual. Lo mismo que suprimió el quinto año de licenciatura, la estabilidad del profesorado o tantas otras cosas más. Lo que todos estos años se ha pretendido –con la excusa de la Convergencia Europea o del Plan Bolonia– ha sido reducir al máximo la parte de la Universidad financiada con dinero público. O mejor dicho, poner el dinero público al servicio del mundo empresarial que pueda intervenir a través de inversiones o másteres de precios prohibitivos. Se trataba de dotar a las empresas de un ejército de trabajadores sin sueldo (o pagados con dinero

público) a los que se llama becarios. Se trataba de garantizar que las empresas que invirtieran en algún departamento universitario recibirían una sustanciosa plusvalía pagada con el dinero de los ciudadanos. Para todo ello, había, en efecto, una receta infalible: bastaba supeditar la financiación pública de los proyectos de investigación y de los departamentos docentes a la previa obtención de fuentes de financiación externa (es decir, privada). El dinero público fluye así de forma natural hacia los chiringuitos privados. De este modo, las empresas pueden utilizar la Universidad estatal como un inmenso aspirador de dinero público que ellas utilizarán para sus propios proyectos privados de rentabilidad. En resumen, a medio plazo, no tendrá financiación pública ningún proyecto académico que previamente no haya demostrado su interés para fines empresariales. Eso es tanto como decir que si una empresa invierte 10 en la Universidad, el Estado invertirá 100 en ese proyecto. Lo que se esconde bajo Bolonia no es más que un inmenso aspirador de dinero público para el sector privado, un cajero automático que el Estado pone a disposición de las empresas. En otro libro, *El Plan Bolonia* (La Catarata, 2010), hemos comentado más en detalle este sistema de latrocinio encubierto.

Es a esto a lo que se llamó «poner la Universidad al servicio de la sociedad». En este proyecto, sobran muchas cosas: los estudiantes en primer lugar, porque había muchos más de los que se necesitaban. Los contenidos académicos, porque tanta sobrecualificación no tenía demanda (la prueba es que los doctores andan por ahí sirviendo copas en los bares de Alemania o del Reino Unido). Sobran los funcionarios, porque no eran flexibles como las demandas mercantiles. Sobran decenas de departamentos e incluso facultades enteras. Nadie en el mercado necesita ya saber griego clásico o filosofía del siglo XVI. Sobraba quinto de carrera. Sobre todo, sobraban los precios públicos de las tasas universitarias. Ahora hemos descubierto que sobraba también el doctorado. Y algunos se han lle-

vado las manos a la cabeza, como si todo esto les viniera de sorpresa.

BOLONIA NUNCA EXISTIÓ

Pero lo más llamativo de todo esto es que cada vez que algunos hemos escrito algún artículo sobre estos temas, una legión de profesores y periodistas responde despectivamente que nada de todo esto que está pasando tiene nada que ver con el famoso Plan Bolonia. Es difícil comprender cómo se puede estar tan en la Luna y durante tanto tiempo seguido. Pues claro que el Plan Bolonia no tenía nada que ver con todo eso. Hubo un libro excelente que publicaron algunos estudiantes muy activos de la lucha contra Bolonia; se llamaba, significativamente, *Bolonia no existe*^[3]. Lo primero que hacía era denunciar que las reformas del Plan Bolonia no eran más que una tapadera de todo eso que estaba pasando y que ahora estamos sufriendo. Bolonia era un plan de homologación de títulos europeos. Proponía un tres más dos (tres años de grado, dos de máster). No decía que no se pudiera hacer esto a precios públicos. De hecho, como veremos, en Alemania y Francia, en donde aún conservan algo del Estado del Bienestar, los precios siguen siendo públicamente asequibles. Todo eso no tenía nada de malo. De hecho, habría sido muy fácil de lograr sin resistencia alguna y con extrema facilidad, llamando grado a los tres cursos de la diplomatura (el llamado primer ciclo) y máster a los dos últimos cursos de la licenciatura (el segundo ciclo).

El Plan Bolonia proponía también un plan de movilidad europea del estudiantado. Era una excelente idea que se podría haber llevado a la práctica con extrema facilidad, multiplicando la dotación de las becas Erasmus. ¿Por qué no se hizo así? Pues porque lo que se pretendía hacer no era eso. Bolonia no era más que humo. Era la tinta del calamar para encubrir, como estamos viendo, una reconversión

empresarial de la universidad pública a favor de la privada. Los estudiantes se dieron muy bien cuenta de que se la estaban jugando y por eso presentaron una batalla frontal durante toda una década. No les fue difícil enterarse de la verdad: les bastó con leer los informes sobre educación que se estaban haciendo en la OMC. Los profesores, mientras tanto, andaban cazando moscas, sin comprender qué podía tener de malo eso de homologarse con Europa. Incluso algunos tontos de remate (más bien de izquierdas, además) se creyeron que se les estaba brindando una buena ocasión para mejorar las metodologías de la enseñanza, para enseñar a enseñar a los profesores y, por qué no, para enseñar a los alumnos cómo se aprende a aprender. Desembarcaron algunos pedagogos y algunos sinvergüenzas disfrazados de pedagogos y la liaron con que se estaba preparando un cambio completo de la cultura del aprendizaje. Cuanta más confusión mejor. Mientras tanto, los planes de reconversión de la universidad pública avanzaban inexorables.

Al final, ni siquiera ha sido verdad lo de la movilidad europea. Todo lo contrario: por una paradoja del destino, Bolonia trajo consigo la obligatoriedad de asistencia a clase, que dificultó mucho la movilidad. Y a la postre, las becas Erasmus están heridas de muerte y son cada vez más impracticables. Las tasas se han elevado al cubo y la famosa Universidad al «servicio de la sociedad» se ha convertido para la sociedad en un lujo bastante impracticable. ¿Es qué ha salido mal el Plan Bolonia? No, es que jamás se trató de que saliera bien el Plan Bolonia. De lo que se trataba era de destruir la Universidad pública y ponerla a competir con las privadas (de hecho, todavía se nos acusa de que los másteres de 4.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid –el quinto de carrera que antes costaba 600 euros–, hacen una competencia desleal a los de las universidades privadas). Se trataba de debilitar una institución que funcionaba mucho menos mal de lo que se ha pretendido en los medios de comunicación pagando a gentuza y a mercenarios y propagandistas.

Lo único que pretendía el Plan Bolonia, que era la convergencia europea del tres más dos, fue, curiosamente, lo primero a lo que se renunció, puesto que en España, se implantó un cuatro más uno. Pues nada, ni por esas cierta gente se dio por enterada de que la cosa no iba de eso.

Y ahora, ya en el paisaje de después de la batalla, seguimos igual. Ahora, muchos profesores contemplan boquiabiertos que también nos hemos quedado sin doctorado. Y balbucean, además, que Bolonia no tiene la culpa. No claro, Bolonia es una ciudad de Italia, no tiene nada que ver con todo esto. Y el Plan Bolonia era un papelucho lleno de buenas intenciones. Por lo visto, algunos pensaron (y por lo visto siguen pensando) que esos diez años de luchas estudiantiles fueron contra la ciudad de Bolonia o contra lo que no era sino la propaganda de la OMC. Algunos no vieron más que molinos de viento. Pero esta vez eran gigantes.

LA TRAMPA DEL 3+2 Y DEL 4+1

Como acabamos de señalar, en España se renunció en seguida –en gran parte por la presión de las manifestaciones estudiantiles– a la convergencia europea del tres más dos (tres años de grado y dos de máster). Se trató sin duda de una victoria de la lucha contra Bolonia, pues está muy claro lo que tendríamos en estos momentos: tres años a precio relativamente público (que triplica de todos modos el precio de las antiguas licenciaturas) y dos años a los precios prohibitivos del mercado. Recientemente, sin embargo, vuelven a oírse rumores sobre la implantación del tres más dos. Y de nuevo se escucha un clamor de protesta al respecto. Sin embargo, es de temer que también en este caso se nos esté tendiendo una trampa mortal en la que no se repara demasiado.

Y es que, el Plan Bolonia se impuso con tales niveles de mentiras de por medio que ahora es muy difícil orientarse. Desde el principio,

todo fue una especie de extorsión mafiosa: no te obligamos a nada, pero te vamos a poner en unas condiciones en las que tú mismo entrarás por el aro. Bolonia son lentejas que las puedes tomar o las puedes dejar, aquí todo es voluntario. Y al final todo quedaba claro. ¿Tu Universidad no quiere proponer másteres a la evaluación de la ANECA? No pasa nada, podéis seguir solo con la licenciatura. ¿No queréis convertir la licenciatura en grado? No pasa nada, podéis ser una Facultad que solo imparta postgrado. ¿No queréis ser evaluados? Es voluntario, no hay problema, pero las otras universidades ya se están evaluando –y desde luego, las privadas–, de modo que cuando haya que recortar facultades y departamentos ya veremos por dónde se empieza. ¿No os gustan las empresas? ¿No queréis financiación «externa»? ¿Y quién os obliga? Eso sí, para obtener financiación pública es un mérito (cada vez más imprescindible) haber obtenido financiación privada. Todo este chantaje institucional se encubrió con unas dosis de propaganda grotesca. Se recordará – ¡qué vergüenza ajena, por dios!– cómo nos decían que iban a cambiar el modelo de enseñanza, la cultura del aprendizaje, que las aulas tendrían que ser más pequeñas, las clases más prácticas, los alumnos sentaditos en círculos, dialogando de tú a tú con el profesor. ¿Ya nadie se acuerda de esto? ¿No se recuerdan los telediarios que hacían propaganda encubierta de una empresa llamada Educlick, que proponía que los profesores fueran sustituidos por mandos a distancia para manejar powerpoints interactivos? Ana Pastor hizo callar a uno de los autores de este libro en 59 segundos, interrumpiéndole a los 23 segundos, cuando intentaba denunciar que el Informe Semanal sobre Bolonia había sido un puro ejercicio de propaganda. Sabemos que es difícil de creer, pero, según ese programa, las clases iban a ser tan prácticas y tan alegres que, en las imágenes, se veía a unos alumnos de oceanografía que –supuestamente gracias a la implantación del plan Bolonia– estaban haciendo submarinismo entre delfines en unos arrecifes de coral. Algunas autoridades académicas

micas daban conferencias explicando que se iba a intentar habilitar pequeñas cocinitas en las aulas, para que los profesores y los alumnos –a los que a veces también podía «sumarse algún artista invitado»– pudieran picotear durante las clases, charlando apaciblemente. No estamos exagerando, existen pruebas documentales de todo esto. En algún curso de preparación para la Convergencia Europea se nos llegó a aconsejar al profesorado técnicas de anti-estrés, proponiendo darnos mutuamente masajes en los pies. Para todo este delirio, se movilizó –como siempre ha sido habitual en estas ocasiones– a «expertos en educación» y pedagogos que emitían terribles informes sobre lo mal que saben enseñar los profesores, que, al parecer, siempre son viejos, feos, anticuados o medio franquistas y se limitan a repetir como loros unos apuntes amarillentos que datan del pleistoceno. El papel de estos «expertos en educación» siempre es el mismo: ponerlo todo patas arribas, revolver los destrozos con un potingue de promesas delirantes y calumnias sin sentido, mezclarlo bien con alguna que otra verdad, y servir en bandeja el resultado a las autoridades gubernamentales. Entonces, estas se ocupan de lo que siempre se había pretendido, la reconversión económica de la enseñanza estatal.

Este diagnóstico lo repitió mil y una vez el movimiento estudiantil contra Bolonia. No hay que insistir más en ello. Lo que interesa ahora recordar es algo que tiene que ver con el asunto del 3+2 que ya el ex ministro Wert empezó a poner sobre la mesa y que planea sobre la Universidad pública como una amenaza. Esta vez también es todo voluntario. Nadie obligará a implantar el 3+2. Las universidades e incluso las facultades pueden decidir lo que prefieran. Pero que conste, se nos dice, que en Europa predomina el 3+2.

En general, la reacción del movimiento estudiantil ha expresado un rotundo NO al 3+2. Sin embargo, una vez más nos han metido en un callejón sin salida en el que el sí y el no conducen al mismo desastre. Se trata de una maniobra de distracción. Se puede com-

prender recordando otra de las vilezas con las que inicialmente se coló el plan Bolonia. En una de las encarnizadas negociaciones con las autoridades académicas, se nos llegó a recriminar nuestro incomprendible alarmismo apocalíptico, alegando que, si nosotros hubiéramos querido, podríamos perfectamente haber dejado las carreras como estaban, *con el 3+2 que ya existía*: tres años de *diplomatura* y dos de *licenciatura*. Así, se nos dijo[4], *no habríamos tenido que tocar nada*. Ni masajes en los pies, ni mesas redondas y cocinitas para alumnos, ni culturas del aprendizaje para enseñar a enseñar, ni nada. Habría bastado un mero cambio de terminología, llamando grado a la *diplomatura* y máster a la *licenciatura*. El cinismo era inaudito porque nos lo decían cuando ya habíamos hecho trizas nuestros planes de estudio para pasar por los «verificas» de la ANECA. La realidad era muy distinta y se podía resumir con franqueza: se acabaron los precios públicos para cinco años de licenciatura; provisionalmente, nos proponían conformarnos con cuatro (de grado). Y el quinto o sexto de estudios superiores que se los pague quien pueda. Eso era todo y punto.

Luego fue mucho peor. Los alarmistas nos habíamos quedado cortos. Un año de licenciatura costaba 600 euros de media y de pronto se colocó el año de grado en unos 1.500 (1.800 si hacemos una estimación media incluyendo la brutal subida de las segundas y terceras convocatorias). Los precios públicos se multiplicaron por tres. En cuanto al 5.º curso de los estudios superiores, que antes costaba 600 euros, ahora aparecía como máster a unos 3.500 euros más o menos (llegando a 4.500 con segundas convocatorias). Es una villanía pretender que esta cruda realidad económica no fue, desde el principio, el principal objetivo de tanta algarabía.

Ahora nos quieren de nuevo confundir, haciéndonos morder el anzuelo y agotarnos en la lucha contra el 3+2. No, señores, *el 3+2 no es el problema*. Antes de Bolonia teníamos un «3+2» magnífico (*diplomatura + licenciatura*) a precios sensatos. Y en Europa, es ver-

dad, predomina el 3+2 y no pasa (relativamente) nada. ¿Saben por qué? Porque un máster en Leipzig o en Berlín cuesta 200 euros al semestre (y te dan el abono de transporte gratis). En París, cuesta 180 euros. En Dinamarca, Bulgaria, República Checa, Bélgica, Suecia, Noruega, Eslovaquia, Islandia, Finlandia y Austria los precios son inferiores a los 400 euros. Todo esto demuestra, una vez más, que, en efecto, Bolonia no era el problema, que Bolonia no era más que la propaganda para encubrir una reconversión económica de la Universidad. En unos países, el neoliberalismo ha ido más rápido que en otros. Lo sorprendente es que, en España, el proceso ha sido vertiginoso, entre otras cosas porque las izquierdas mordieron el anzuelo de que se trataba tan solo de una «revolución educativa». Ahora, por supuesto, se replica que la subida de precios no ha tenido nada que ver con ese Plan Bolonia que puso a los estudiantes en la calle desde el año 2000 (cuando se conoció el llamado Informe Bricall). De nuevo, la misma cínica paradoja: los estudiantes se pasaron diez años advirtiendo de que Bolonia no era Bolonia, sino otra cosa. Y ahora que tenemos esa otra cosa, se les replica que, por lo tanto, la culpa no era del Plan Bolonia.

¿No se trata de converger con Europa? Pues empecemos por los precios y luego hablamos de eso del «tres más o dos» o lo que sea. Que no nos engañen. Bolonia no cortó las carreras en dos más que con la finalidad de reducir los años que se podían estudiar a precios públicos sensatos. Ahora quieren recortar aún más. Pero que no nos vengan con cuentos sobre la racionalización europea del 3+2. Bienvenido sería un 3+2 a precios europeos. Y si no van a cambiar los precios, por supuesto, luchemos por el 4+1. Pero teniendo muy claro que esto es ya una inmensa derrota sobre la cuestión económica principal. Tengamos esto muy presente en todas las discusiones que se avecinan sobre el tipo de Universidad que se quiere proponer, por ejemplo, desde Podemos.

Y mientras tanto, recordemos que la entonces secretaria de Estado

de educación, Montserrat Gomendio ya se descolgó en su momento diciendo que el modelo actual de la universidad estatal era *insostenible*. Uno se pregunta ¿y por qué fue sostenible durante tantas décadas justo en la época más masificada del *boom* demográfico? ¿Cómo es entonces sostenible en Alemania, en Francia o en Finlandia? Con muchos impuestos, se dijo. Pues habría que estudiar las proporciones. El Partido Popular, en todo caso, es contrario a subir los impuestos. Y mucho menos a subir su carácter progresivo y afectar a las grandes fortunas. Tampoco es partidario de aumentar el número de inspectores fiscales hasta llegar al nivel europeo. Menos aún de ponerles a investigar el fraude a gran escala. Así es que ya saben ustedes, comuníquenselo a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos y a sus conocidos y allegados: si usted quiere suprimir la Universidad estatal en la que estudiaron las últimas generaciones y reservar la Universidad para una escogida élite adinerada, vote al Partido Popular. También existe la opción de llegar al mismo resultado votando al Partido Socialista Obrero Español: al fin y al cabo, fue este último partido quien llevó la iniciativa en la implantación de ese supuesto Plan Bolonia. Ahora solo hay que rematar la faena. El objetivo estaba claro desde el principio, ya en el año 1999: se acabó eso de que todo el mundo pueda estudiar en la Universidad. Nosotros fuimos universitarios, nuestros hijos y nuestros nietos no lo serán.

En resumen, insistimos: Bolonia no existe. Lo que se ha llamado el «proceso de Bolonia» para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no es más que la tapadera de otro proceso más profundo, de carácter económico, que se decidió a puerta cerrada en las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS). Allí se decretó emprender una ofensiva neoliberal contra la Universidad pública europea. Se trataba, ante todo, de transformarla en una institución rentable al servicio del mundo empresarial. Para

ello, por supuesto, era necesario suprimir todo lo que en la Universidad pública fuera considerado un gasto inútil desde el punto de vista del mercado. El proceso se implantaría a distintas velocidades, según las poblaciones de los distintos países ofrecieran mayor o menor resistencia. Pero, para acelerar el proceso, se contaba en algunos países como España, con la complicidad e incluso con el entusiasmo izquierdista.

Por supuesto, estos planes no se discutieron públicamente en ningún Parlamento y menos aún con las autoridades académicas, los estudiantes o los profesores de la Universidad. Fue una decisión de la patronal europea. Los empresarios no discutieron con la sociedad, discutieron entre ellos lo que había que hacer y lo hicieron. Y luego pasaron el mensaje a los ministros de educación de la Unión Europea, para que fueran ellos los que buscaron la manera de presentar sus planes a la sociedad. No se podía salir en televisión y decir, así sin más: «Señores, vamos a poner patas arriba toda la Universidad pública europea porque hemos visto que podemos ganar mucho dinero».

Había que buscar un buen truco propagandístico y eso fue lo que los ministros de educación inventaron en Bolonia, donde firmaron la famosa declaración, en 1999. Decidieron entonces que los planes de la patronal europea con respecto a la Universidad podían venderse a la sociedad bajo los ropajes de una «cambio en la cultura del aprendizaje» que lograría dar a luz un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Eso convencería a mucha gente, podría presentarse, incluso, como algo progresista: una reforma de los procedimientos pedagógicos, una modernización de la Universidad, una sustitución de una cultura centrada en la enseñanza y las lecciones magistrales por una cultura protagonizada por el alumno y centrada en el aprendizaje, una homologación de títulos a nivel europeo, una potenciación de la movilidad estudiantil por distintos países, ¿quién se atrevería a oponerse a una cosa así? Así presentadas las cosas el

proyecto de poner a la Universidad al servicio de la patronal no encontraría resistencia ni por parte de los gobiernos socialistas, ni por parte de la derecha. Y dio resultado: en España, por ejemplo, ni el Partido Popular ni el PSOE se opusieron jamás en lo más mínimo al Plan Bolonia. Más bien se han reprochado mutuamente que la cosa no avanzara suficientemente aprisa.

Así pues, la propaganda comenzó ya en 1999. La propia Declaración de Bolonia no fue más que puro *marketing* propagandístico que intentaba enmascarar lo que realmente iba a ocurrir. Y la propaganda ha continuado sin tregua desde entonces. Siguiendo una vieja táctica neoliberal para el desmantelamiento de las instituciones públicas, lo primero que se hizo fue emprender una monumental campaña publicitaria para desprestigiar a la Universidad Pública. Es la misma táctica que en los años ochenta siguieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher para desmantelar la sanidad pública, los ferrocarriles, el servicio de correos y las empresas estatales en general. Primero se estrangula la financiación pública, se hace lo posible por deteriorar los servicios, los puestos de trabajo, las infraestructuras... Al mismo tiempo, se invierten millones y millones en campañas de propaganda que denuncien el pésimo estado de los servicios públicos. Y cuando ya se tiene a la población convencida de lo mal que funcionan los ferrocarriles, la sanidad o el servicio de correos, se emprende su privatización.

Y, en efecto, durante los años 2007 y 2008, se emprendió una campaña mediática de dimensiones sensacionales, con la intención de desprestigiar a la Universidad pública. La cosa llegó hasta el punto de que se llegó, por ejemplo, a denunciar en los telediarios y los periódicos la suciedad incurable de la Universidad Complutense de Madrid filmando y fotografiando el estado del campus a la mañana siguiente de un botellón masivo para adolescentes que había sido convocado en la red. No había día en el que no saliera en la prensa algún artículo alertando sobre los males –al parecer incurables y

escandalosos— de las universidades públicas. Se mintió, se difamó, se calumnió, se habló por hablar y sin fundamentar ni aportar dato alguno, presentando a la universidad como si se tratase de una cueva de ladrones vagos e incompetentes que ni sabían enseñar, ni investigar, ni estudiar. Se repitió no cien, sino millares de veces, que todos los profesores se limitaban a dictar apuntes amarillos que habían heredado poco menos que del franquismo, que los alumnos no hacían otra cosa que aprenderse rollos de memoria para olvidarlos inmediatamente después del examen, que nadie tenía ni idea de las nuevas tecnologías, al parecer imprescindibles (sobre todo para quien las vende, por supuesto), que todo era corrupción, endogamia, absentismo, incompetencia y tantas y tantas otras cosas peores aún. Un portavoz de la ANECA llegó a comparar los departamentos y las cátedras universitarias con pozos negros, contraponiéndolos al aire fresco de las revistas científicas internacionales.

La campaña fue tan canallesca que algunos de los profesores más prestigiosos de España en el campo de las Humanidades publicaron, desde Cataluña, un Manifiesto titulado *Por una universidad pública al servicio de toda la sociedad. Contra una campaña para desprestigiarla y mercantilizarla*[5], en el que pedían un poco de respeto hacia el mundo académico y denunciaban al círculo de empresarios como uno de los orígenes esta campaña publicitaria. Pero, por supuesto, los periódicos no se hicieron eco de ello.

La campaña de desprestigio respecto a la Universidad pública fue un completo éxito: se logró inocular en la opinión pública un virus de rencor y desconfianza, hasta generar la imagen de una Universidad corrompida en la que supuestamente reinaría la pereza, el nepotismo, la ignorancia y el despilfarro[6]. Vicios que, en general, podían fácilmente ser extrapolados a la del funcionariado en general, de modo que cualquier institución pública estatal se ha llegado a convertir en sospechosa. Para convencer a la sociedad de esta cruda realidad, se han invertido toneladas de propaganda y mucho dinero,

movilizando un ejército de periodistas sin vergüenzas a las órdenes de una vanguardia de canallas afincados en el Ministerio y las consejerías en calidad de expertos en educación.

[1] Cfr. M. Éliard, *El fin de la escuela*, cit., pp. 160-165.

[2] VV.AA., *El debate sobre las competencias. Una investigación cualitativa en torno a la Educación Superior y el Mercado de trabajo en España*, Madrid, ANECA, 2009, p. 121.

[3] Luis Alegre y Víctor Moreno (coords.), *Bolonia no existe. La destrucción de la Universidad europea*, Hondarribia, Hiru, 2009.

[4] Fueron palabras del actual rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradadas, cuando aún era vicerrector de Carlos Berzosa.

[5] Disponible en <<https://repositori.wordpress.com/manifiesto/>>. El manifiesto fue promovido por 26 profesores de universidades catalanas, entre ellos, Josep Fontana Lázaro, Antoni Domènech Figueres, Francisco Fernández Buey, Vera Sacristán o Albert Corominas Subías.

[6] La misma estrategia, por supuesto, se ha seguido en sanidad. En el Hospital del Niño Jesús de Madrid, hay ahora mismo colgada una pancarta que la resume muy bien: «Desprestigiarnos, para privatizarnos».

CAPÍTULO VII

Un nuevo feudalismo para la Universidad

Hoy en día, en todas partes se celebra el conocimiento. ¿Quién sabe si algún día llegarán a crearse universidades para volver a instaurar la ignorancia?

Lichtenberg (1742-1799)

LA NUEVA EDAD MEDIA QUE SE CIERNE SOBRE LA ENSEÑANZA

En su esencia, asistimos al nacimiento de una nueva Edad Media, de un nuevo feudalismo que respecto a la Universidad es especialmente llamativo. La cosa podría resumirse en un dicho que circuló con bastante éxito en el marco de las luchas contra Bolonia y que – para nuestra sorpresa– hacía reír a todo el mundo, sobre todo en ambientes que se consideraban de izquierdas: «Por lo menos, Bolonia nos traerá el capitalismo y terminaremos así con el feudalismo en la Universidad». Era una gracia miserable y miope, que encerraba una gravísima e irresponsable confusión. Una confusión que, por cierto, ha hecho muchísimo daño no solo en la Universidad, sino también en el ámbito más amplio de la enseñanza secundaria y el bachillerato.

Porque el mal llamado proceso de Bolonia no ha terminado con la Universidad feudal, sino con lo que en ella quedaba de Ilustración. «Bolonia» ha socavado las instituciones republicanas que articulaban la vida universitaria. Y en su lugar ha instaurado el reino de lo privado, lo que podríamos llamar un nuevo feudalismo. Con el pretexto de acabar con la corrupción feudal de las instituciones, ha acabado con las instituciones mismas, abriendo, además, las puertas al salvajismo de los feudos más corruptos y poderosos. Para combatir la corrupción de algunos catedráticos (en lugar de hacer caer sobre ellos todo el peso de una Inspección de servicios decente), se ha

puesto a la Universidad en manos del Banco de Santander, la casa Bayer o Inditex. Eso a lo que suele llamarse los «agentes sociales», empresas, corporaciones, bancos, laboratorios farmacéuticos, etc., no son, en definitiva, sino coágulos de economía privada que funcionan internamente como feudos incontrolables por la ciudadanía.

De nuevo, conviene insistir en algo que ya hemos comprobado varias veces en este libro: la jerga antiinstitucionalista de mayo del 68 ha venido de perillas para presentar en sociedad todas estas transformaciones. Los anarcocapitalistas como Esperanza Aguirre o Jiménez Losantos, los banqueros postmodernos como Botín, se han entendido aquí a las mil maravillas con los «expertos en educación» de tendencia izquierdista. La pinza que, de esta forma, se ha ido cerrando sobre el mundo de la enseñanza ha sido extremadamente eficaz: había que acabar con las rígidas instituciones republicanas de la Ilustración y sustituirlas por recetas más flexibles, imaginativas, creativas, lúdicas, antijerárquicas, personales, motivadoras... Hemos visto ya en el capítulo II, que ni la escuela pública se ha librado de esta barbarie. Una de las más gloriosas conquistas de la clase obrera europea se ha visto así medida con la vara de una canción de Pink Floyd, como si se de lo que se tratara fuera de hacer realidad eso de «*Hey! Teacher! Leave the kids alone!*». Toda la dignidad de la escuela pública, levantada con el inmenso esfuerzo de las luchas sociales, sostenida con la vocación, en muchos casos muy desinteresada, de una legión de profesores y maestros amantes de su profesión, fue pisoteada por los discursos izquierdistas de los años setenta. Al comienzo de este libro hemos tenido un ejemplo de ello en la ocurrencia althusseriana de considerar la escuela un aparato ideológico de Estado o en las ocurrencias foucaultianas que alinearon la escuela con los manicomios o las cárceles, considerándola una institución disciplinaria de «vigilancia y castigo». Cuarenta años después, hemos contemplado estupefactos cómo el desmantelamiento de la Universidad pública decretado por la OMC en 1999, se ha servido de la

misma manía antiinstitucional para presentarse al público. Una vez más, se trataba de «suprimir las tarifas» y las «jerarquías», de suprimir, en suma, la diferencia entre saber y no saber.

En otros ámbitos, desde luego, se fue mucho más allá y bien caro que lo vamos a pagar. No hay más que recordar algunos disparates foucaultianos de los años setenta, abogando por superar la «forma tribunal» e incluso «la diferencia entre inocente y culpable». Se llegó a perder hasta tal punto el norte de la cuestión que resultaba de lo más de izquierdas hacer una apología del linchamiento –como hace Foucault en *Microfísica del poder*– creyendo haber dado con la piedra filosofal que nos permitiría convertir el Derecho en algo más «espontáneo», «popular» y «creativo»[1]. «Destruyamos lo que hay y, después, ya se nos ocurrirá algo», declaraba Foucault. La primera parte del plan ya está a punto de cumplirse. Y lo malo es que no se nos ocurre nada. El capitalismo no nos va a consultar sobre lo que hay que poner en el lugar de la escuela pública, la seguridad social o el sistema estatal de pensiones.

Pero tanta rebeldía contra las instituciones tuvo sus efectos. El resultado ha sido que, en los últimos diez años, incluso los votantes de «izquierda» han ido aceptando más o menos sin rechistar la privatización de toda la gestión de las instituciones públicas, con la consiguiente degradación de las condiciones laborales que ello conlleva y la perversión de todo el orden de prioridades humanas que hay en juego. Tenemos ya un sistema de correos privado, una seguridad privada, una policía privada, unos ferrocarriles privados, una televisión privada, una justicia cada vez más privada (metamorfoseada en agencias para la mediación de conflictos) y una enseñanza y una sanidad en la que lo privado no ha cesado de ganar terreno a lo público, hasta desembocar en el desastre actual. Es impresionante comprobar cómo esta reconversión mercantil que ha destruido en una década el Estado del Bienestar y las garantías constitucionales más elementales, flexibilizando todo el tejido institucional republi-

cano a favor de las demandas mercantiles, ha contado con el apoyo los discursos izquierdistas. Se lograba, así, que nadie se atreviera a partir una lanza a favor del Estado, de la escuela, de la sanidad pública, del Sistema Estatal de Correos y Telecomunicaciones, de los ferrocarriles estatales, etc. El ejemplo de la Universidad es pavoroso: las órdenes de la OMC y el GATS para la comunidad académica fueron obedecidas con todo el entusiasmo del mundo por todos sus ministros, rectores, vicerrectores y directores generales de «izquierdas», mientras los asesores pedagógicos y los expertos en educación cantaban alabanzas como si se tratara de una gran ocasión para cambiar en general el modelo educativo, supuestamente disciplinario, obsoleto y conservador, o, en resumen, como se solía decir, «feudal». Y al final, sencillamente, han venido las derechas para rematar la faena y barrer los escombros.

Así, pues, respecto a la Universidad, todo el mundo se subió al carro de la revolución neoliberal, con la esperanza, como hemos dicho, de que «el capitalismo nos librara al menos del feudalismo». Todos, a excepción del movimiento estudiantil, que, paradójicamente, tuvo que volverse muy «conservador». Como el desmantelamiento de la Universidad Pública se vestía con los ropajes de una inaudita «revolución cultural y educativa», los estudiantes antisistema aparecían –para periodistas y autoridades académicas– como desconcertantemente conservadores. ¿Acaso querían conservar la «universidad feudal» de toda la vida? Nadie parecía darse cuenta de que el modelo de universidad que estaba siendo salvajemente atacado no tenía nada que ver con el feudalismo, sino con la Ilustración. En cambio, las derivas feudales se iban a quedar como estaban. Y en el lugar de la universidad «humboldtiana» (lo que los documentos de la patronal[2] llamaban «el modelo europeo» de universidad, contrapuesto al americano, mucho más competitivo y flexible) lo que se nos venía encima era una contrarreforma feudal, protagonizada por esos nuevos feudos del siglo XXI que son las corporaciones

económicas. Los estudiantes, en efecto, han sido muy conservadores. El movimiento estudiantil ha sido muy consciente de que hay cosas que siempre hay que *conservar a cualquier precio*: la *dignidad*, por ejemplo. A la Universidad le corresponde la tarea de conservar a cualquier precio la dignidad de la ciencia, la dignidad de los estudios superiores. En lugar de ponerse «al servicio de la sociedad», la Universidad debe ser con dignidad aquello que le corresponde ser, para que así la sociedad pueda sentirse *orgullosa de tener una Universidad*.

¿Cómo es posible que un lema tan pernicioso y miope como el de que «hay que poner la Universidad al servicio de la sociedad», haya sido aceptado sin rechistar como una evidencia indiscutible e incluso progresista y de izquierdas? Solo el movimiento estudiantil se atrevió a recordar algo tan elemental como que la Universidad tiene que estar al servicio de la verdad y no de la sociedad, del mismo modo que los tribunales de justicia tienen que estar al servicio de la justicia, y no de la sociedad. De nuevo, hay que recordar una evidencia que planteábamos en el capítulo II: no es el Derecho el que debe de estar al servicio de la sociedad, sino la sociedad la que debe de estar en estado de Derecho. Si la sociedad quiere estar orgullosa de tener una verdadera Universidad, lo mejor que puede hacer es dejarla en paz. O como una vez dijo Lévi-Strauss: dárselo todo y no pedirle nada.

MÁS ALLÁ DE LA ILUSTRACIÓN: LA GOBERNANZA UNIVERSITARIA INVADE EUROPA

Da vergüenza recordar toda esta complicidad «progresista» con el proceso de Bolonia, ahora que por fin hemos desembocado punto por punto, en el desastre sobre el que el movimiento estudiantil llevaba alertando desde el año 2000. Todo estaba previsto; incluso la manera en la que, llegado el momento, se iban a autoexculpar las autoridades académicas: «El Plan Bolonia era bueno, lo que pasa es

que no ha podido aplicarse por falta de medios económicos». ¿Realmente pensaron alguna vez que se iban a invertir paletadas de dinero público en esa «revolución educativa»? Es imposible que lo pensarán, no se puede ser tan idiota. Sencillamente, mentían y el movimiento estudiantil, en cambio, decía la verdad: Bolonia no solo se iba aplicar a coste cero, se iba a aplicar a coste menos cero, porque en realidad ese era su verdadero propósito inconfesado[3]. Hay que repetirlo una y mil veces: Bolonia no era una revolución educativa, era una reconversión industrial aplicada a la Universidad; era un ERE salvaje, un robo masivo de dinero público para desviarlo hacia negocios privados, además de un invento magnífico y novedoso: trabajadores para las empresas pagados no por las empresas, sino por otros trabajadores, es decir, un ejército de becarios cobrando de los impuestos para trabajar –sin ningún derecho laboral– para corporaciones privadas. No es que la crisis haya frustrado Bolonia. La crisis es, ante todo, una salvaje revolución neoliberal que está aprovechando la debilidad de los trabajadores para dismantelar todas las conquistas sociales que se habían consolidado en legislaciones e instituciones estatales desde la segunda guerra mundial. Una de estas conquistas era la enseñanza pública. Bolonia era una de las avanzadillas de la crisis. Pueden repasarse todos los documentos elaborados por el movimiento estudiantil desde el año 2000. Habrá quien diga que eran proféticos. Pero no lo eran: simplemente, estaban bien informados. Porque todo lo que está pasando estaba anunciado en los documentos maestros de la patronal europea y mundial.

Al mismo tiempo que avanzaba la campaña de desprestigio, se iba preparando el camino para la mercantilización de los departamentos. Se desposeyó a los catedráticos de todas sus competencias, de modo que las cátedras dejaron de ser unidades de investigación y docencia. Esto fue muy aplaudido como una gran victoria contra el feudalismo. Lo que en verdad estaba ocurriendo era muy distinto: con la excusa de luchar contra el nepotismo (que podría haberse

combatido perfectamente modificando el sistema de oposiciones y con una inspección de servicios decente, en suma, con más democracia interna y más Ilustración), lo que se hizo fue desintegrar las unidades de investigación en mil moléculas inestables y siempre amenazadas por las agencias de evaluación, de modo que lo único que se ha acabado por investigar en la universidad han sido los procedimientos para conseguir y conservar proyectos de investigación. No hay tiempo para más: el diseño de currículos se convirtió en la actividad principal del PDI[4]. También la asistencia a reuniones interminables necesarias para organizar todo este proceso destructivo. En suma: jamás la burocracia había robado tanto tiempo a la docencia y a la investigación.

Recientemente, unos profesores holandeses han alertado sobre esta situación, publicando un manifiesto en defensa de la Universidad Pública[5]. Al leerlo, salta a la vista que nos encontramos frente a una revolución neoliberal de alcance europeo y mundial. Su minuciosa descripción de la actual vida universitaria pone los pelos de punta, pero no puede ser más exacta. Citamos a continuación el comienzo del artículo:

La Universidad ha sido ocupada no por estudiantes en sus protestas (como ocurrió en los años sesenta), sino esta vez por el Lobo de mil cabezas de la dirección o gestión empresarial. El Lobo ha colonizado la Academia con un ejército mercenario de gestores armados con sus hojas de cálculo, indicadores de eficiencia y procedimientos de evaluación, y acompañado por la Marcha militar «Eficacia y Eficiencia» sonando a todo volumen. Estos gestores han proclamado que su enemigo interno es el profesorado: el profesorado no es de fiar, debe ser evaluado y monitorizado, y sometido a la amenaza permanente del despido, la no reposición y la reorganización. Los académicos se dejan mansamente apretujar unos contra otros, como ovejas aterrorizadas y obedientes, que esperan al menos mantenerse en cabeza entre sus colegas. El Lobo usa los medios más peregrinos para mantenerse en el control, como por ejemplo las

fusiones completas o parciales más costosas, los sistemas de mediciones más retorcidos y más gravosos posibles, los sistemas de cuantificación o los proyectos de prestigio y relaciones públicas más extremadamente caros.

La gestión empresarial de la Universidad comienza, según estos autores holandeses, con una cuantificación y un recuento, centrado ante todo en el número de publicaciones, predominantemente en inglés y en revistas internacionales de «alto impacto». Esta ha sido la trituradora que ha cambiado por completo la vida académica. Todo el mundo compite con todo el mundo para figurar en los *rankings* internacionales y en esa actividad se consume la mayor parte del tiempo del profesor. Los indicadores de impacto cambian constantemente, porque hecha la ley hecha la trampa. Por ejemplo, cuando los méritos empezaron a ser contabilizados por las veces que los artículos eran citados en otras revistas a su vez de alto impacto, los colegas se fueron poniendo de acuerdo para citarse entre sí. «Tras el colapso de cada indicador, se fabrica uno nuevo y el juego vuelve a empezar» (p. 3).

El sistema de evaluación doble ciego y las entrevistas personales han sustituido así las comisiones y tribunales que antes evaluaban las plazas, las tesis y las publicaciones. Aparentemente el sistema es muy garantista, pero el resultado ha sido desastroso. La política de acceso a las plazas universitarias se ha vuelto casi delirante. Como todo depende de las publicaciones en revistas y de los (siempre inestables) índices de impactos, la comunidad universitaria se ha especializado en generar currícula de diseño. Ya no hay publicación científica ni clásica a la que se dedique tantas horas y tantos esfuerzos como a generar el propio currículum y presentarlo a las agencias de evaluación. Finalmente, el propio concepto de publicación científica se está viendo corrompido. También aquí la descripción de Halfman y Radder es minuciosamente exacta:

El sistema de las publicaciones científicas está completamente destruido: ahora es un inmenso río de publicaciones sin valor ninguno, de artículos publicados y republicados «para diferentes lectores», de citas por estrategia, de revistas oportunistas con fines comerciales: una masa exponencialmente creciente de productos *que jamás serán leídos*. En esta factoría de publicaciones jamás promoverás tu carrera *leyendo* esos artículos, sino escribiendo la mayor cantidad de ellos, o poniendo tu nombre en los que se escriban, y encontrando esto absolutamente normal[6].

Respecto de los *rankings* de revistas científicas las agencias de evaluación externas silenciaron una noticia importantísima. Algunas de las revistas científicas y académicas más prestigiosas del mundo (las que obtenían precisamente los mejores puestos en los rankings en cuestión) han exigido ser retiradas del «Índice Europeo de Referencia para las Humanidades» (ERIH) que está elaborando la Fundación Europea de la Ciencia. Este índice pretende clasificar las revistas científicas de humanidades –incluidas historia y filosofía de la ciencia– con criterios «de liga deportiva, con primera, segunda y tercera división». Pues bien, los editores de HSTM (Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina) enviaron la siguiente petición al ERIH (conviene no perderse una palabra):

El ERIH está basado en un malentendido fundamental sobre el modo en que se produce y se publica la investigación en nuestro campo, y en las humanidades en general. La calidad de las revistas no puede separarse de sus contenidos y de sus procesos de revisión. Una investigación magnífica se puede publicar en cualquier lugar y en cualquier idioma. Quizás los trabajos verdaderamente rompedores tienden a provenir de fuentes marginales, disidentes o inesperadas, más que de líneas mayoritarias bien asentadas y atrincheradas. Nuestras revistas son variopintas, heterogéneas y distintas. Algunas están dirigidas al público general e internacional, otras tienen un contenido más especializado y, en consecuencia, un público más especializado. Su alcance y su público no dicen

nada sobre la calidad de su contenido intelectual. Además, el ERIH confunde calidad con internacionalidad de un modo especialmente pernicioso para las revistas especializadas y las no publicadas en inglés. En un informe reciente, la Academia Británica concluye, en un juicio sensato y demasiado benévolo, que «el Índice Europeo de Referencia para las Humanidades, tal y como está concebido actualmente, no constituye un procedimiento fiable de construcción de métricas para publicaciones revisadas por pares». Los ejercicios como el ERIH se pueden convertir en profecías autocumplidas: si índices de este tipo son adoptados como métricas por las agencias de financiación y otras agencias, entonces mucha gente de nuestro sector considerará que no tiene muchas más opciones que limitar sus publicaciones a las revistas de la primera división. Habrá menos revistas, mucha menos diversidad, y se empobrecerá la disciplina. Junto a otras muchas personas de nuestro campo, esta Revista ha llegado a la conclusión de que no quiere formar parte de este ejercicio ilegítimo y equivocado. Este editorial conjunto está siendo publicado en revistas del campo de la historia de la ciencia y los *science studies* como expresión de nuestro rechazo colectivo y de nuestra negativa a permitir que nuestro campo se gestione y se evalúe de esta manera. Hemos pedido a los compiladores del ERIH que eliminen los títulos de nuestras revistas de sus listas[7].

Esto suponía un auténtico mazazo contra toda la mitología de la «calidad» impuesta por las agencias de evaluación. Pero se silenció por completo. Una iniciativa semejante han tenido algunos prestigiosos profesores de la Universidad de París IV-Sorbonne respecto a los índices de calidad manejados por las AERES (la ANECA francesa). También se ha silenciado.

Las unidades de investigación –antes centradas en cátedras vitalicias y departamentos científicos estables– se han visto también afectadas por el segundo principio de la termodinámica. Constantemente se crean y se destruyen grupos de investigación ligados a proyectos de investigación igualmente inestables e impre-

visibles. Esto ha generado un verdadero «circo de solicitudes» en los que la comunidad científica está permanentemente embarcada. En verdad, jamás ha habido una burocracia más tediosa y asfixiante. La continua solicitud de proyectos de investigación y la ininterrumpida redacción de informes para rendir cuentas ha anegado por completo los cauces de investigación, de modo que cada vez se impone la conciencia de que las solicitudes y los informes son suficientes tareas para el investigador. No hay tiempo para la investigación, solo para la rendición de cuentas y la evaluación. Esto no es la tan proclamada «sociedad del conocimiento» sino una «sociedad del espectáculo» de nuevo cuño, en la que siempre se está diciendo lo que está haciendo sin que se haga jamás.

Todo ello unido, por supuesto, a la ya mencionada supeditación de la financiación pública a la previa obtención de financiación privada: «Aquel que tiene dinero, recibirá más dinero»[8].

En la cultura de los ganadores, nadie mira lo que cuesta mantener este fuego con vida constante. Las estrellas del juego relegan sus obligaciones docentes a trabajadores temporales infrapagados. Ese tiempo que ahorran puede dedicarse a la expansión de su propio imperio investigador. Piden más dinero o mejores recursos de investigación, incluso en detrimento de sus colegas más dóciles[9].

Pero aparte de la dilapidación del tiempo y los recursos de investigación, los efectos son perversos e incluso inmorales. Una unidad de investigación sobre la vacuna de la malaria puede quedarse sin financiación (al no encontrar laboratorios privados interesados en su rentabilidad), mientras que el dinero público puede fluir a raudales para investigar tintes para teñir anos oscuros de color rosa (según las modas del porno), siempre y cuando alguna empresa de cirugía estética esté interesada en invertir. Lo becarios pagados con dinero público fluirán entonces siguiendo los cauces de financiación. Ni la verdad ni la justicia son ya indicador alguno de estos caprichosos

caudales financieros que solo se orientan por la rentabilidad. En nuestro ya citado libro *El Plan Bolonia* hemos analizado más en detalle lo que ocurrió, por ejemplo, con la investigación de la Viagra femenina o, lo que fue mucho más grave, con el caso de los genéricos en la batalla del tercer mundo contra el SIDA. La gobernanza universitaria, en efecto, también tiene sus víctimas: en este caso estamos hablando de millones de personas condenadas a morir por una lógica universitaria que se pretende eficiente.

El aspecto de la docencia universitaria ha sufrido un parecido encontronazo con el mundo de la evaluación. «Un ejemplo sencillo son los sistemas extensivos de documentación de la enseñanza en los que los profesores tienen que recopilar todo tipo de detalles administrativos sobre sus clases, incluyendo cómo cada pregunta de un examen está unida a una competencia docente específica» (*idem*). No vamos ahora a insistir en ello. Lo hemos diagnosticado ya en la enseñanza primaria y secundaria y la Universidad no hace sino seguir el mismo camino por el que se ha destruido en general eso que se llamaba «libertad de cátedra».

Los autores holandeses que estamos comentando nos informan sobre el destino que nos espera también en este país. Se impone cada vez más el concepto de «Universidad emprendedora» que sabe buscar rentabilidad en su intercambio con la sociedad, cooperando con el mundo de los negocios. «El clímax de la ridiculez es la medición del “valor mediático” de los artículos publicados en periódicos por académicos de la Universidad VU de Ámsterdam. En lugar de evaluar la contribución al debate público que hace el autor, se consideran estos artículos como publicidad para la Universidad: su “valor” se calcula de acuerdo con el precio que los medios cobran a los anunciantes junto a ese artículo en el que se menciona a dicha Universidad»[10]. La situación que describen estos profesores holandeses parece una desdichada confirmación de los vaticinios más cenizos de la lucha contra la mercantilización de la Universidad en

nuestro país:

En nombre del alivio económico, la investigación en Holanda se ha rendido a los sectores más poderosos de «The Netherlands INC» (similar al IBEX35 español): los «sectores top» de la economía holandesa. Las empresas de objetivos lucrativos controlan las infraestructuras de la investigación pública. Se les permite reestructurar la investigación para que encaje con un horizonte temporal que agrade a sus accionistas; y si es necesario, en detrimento de las infraestructuras del conocimiento a largo plazo o de las disciplinas que no se pueden comercializar fácilmente: matemáticas, lenguas minoritarias, filosofía y todo un conjunto de sectores esenciales del conocimiento que no necesariamente generan dinero[11].

Es algo en lo que, en el ámbito de la Filosofía, estamos ya experimentados. Siempre que se nos ha venido a explicar lo muy útiles que podemos resultar para el mundo empresarial, se nos ha hablado de transformar nuestra disciplina en algo así como una «neuroética de la innovación laboral» o un *coaching* humanista para ejecutivos incultos y agresivos que no entienden, por ejemplo, que para firmar un contrato en Japón hay que descalzarse en el umbral de la casa.

Conviene citar algo más sobre el presente holandés para conocer la senda por la que vamos en camino:

Vendemos nuestras universidades y facultades en la esperanza de que ello permitirá mantener nuestra estructura académica viva. Echamos a los que se oponen, o a aquellos cuya capacidad de ganar dinero es demasiado escasa, sacrificamos ultrajantemente los contenidos, o competimos encubiertamente con los consultores empresariales en la consecución de los fondos públicos. Y cuando parecía que toda esta estrategia nos permitiría sobrevivir, el Lobo nos dice que seguramente tendremos que entrar en la selva de las auditorías –iliquidación y privatización! (Podríamos poner aquí la lista de los departamentos forzados a convertirse en fran-

quicias comerciales). Al mismo tiempo, la ocasión es idónea para un «proceso selectivo de mejora de la calidad» (es decir, un ERE) para alegría de las organizaciones que financian la universidad, que permitirán al Lobo continuar en el poder absoluto[12].

Y lo más triste que diagnostica este Manifiesto de los profesores holandeses es que, mientras tanto, la Universidad pública se ha quedado sin aliados. Ni siquiera contamos con nosotros mismos, enzarzados como estamos en la lucha de la competición de todos contra todos. Pero es que, «tampoco hay apoyo social». Ha bastado con eso de poner la Universidad al servicio de la sociedad, para que, paradójicamente, la sociedad haya perdido todas las ganas de proteger su Universidad. Y en verdad, la reacción es enteramente lógica. Si la Universidad se convierte en un negocio, que se las arregle, que la paguen las empresas, ya que tarde o temprano se beneficiaran con ello. O lo que aún es más obvio: si los estudiantes, al estudiar, están, no ejerciendo un derecho, sino haciendo una *inversión individual*, que se la paguen ellos. El diagnóstico holandés es tan realista y descorazonador que no es posible resistirse a citarlo:

Y el ciudadano tiene razón: la Universidad holandesa ya no trabaja para su sociedad. No hay ya un museo de la ciencia, ni una universidad pública, ni una universidad como plataforma para la ascensión social de la gente, sino conocimiento privatizado encapsulado en patentes carísimas, publicado en revistas académicas exclusivas y privativas en lengua inglesa que se dirigen a colegas internacionales y al mundo de los negocios. Las revistas académicas holandesas que trataban temas de interés para la sociedad han sido eliminadas, sacrificadas en el altar de los índices académicos internacionales. Organizamos programas de grado en inglés de alta calidad dirigidos al mercado internacional de estudiantes excelentes, con becas buenas, que generan más ingresos a la universidad. La universidad emprendedora está interesada en los proyectos lucrativos y no en las preocupaciones ciudadanas. El juego de Holanda como socie-

dad del conocimiento ha fracasado y se ha vuelto contra nosotros. Tampoco podemos contar con el apoyo de los estudiantes— atrapados como están entre solicitudes de créditos para estudiar, becas de excelente rendimiento y perspectivas de mercado de trabajo esqueléticas, o mesmerizados por el halo de una vida consumista. ¿Por qué iban a simpatizar con el académico que les pone problemas para conseguir su título, que plantea obstáculos intelectuales en el zigzagueante camino a los créditos que tienen que conseguir sí o sí? Cuando la dirección de empresa convirtió a los estudiantes en máquinas bien engrasadas, llenas de deudas, de desarrollo de actividades orientadas al futuro contrato laboral en el mercado, nosotros no movimos un dedo. Tienen razón también. Así que aquí estamos: cobardes, mendigos, ladronzuelos y compinches. Juntos, hacemos frente al Lobo solitario[13].

EL UNIVERSO DE LA CALIDAD

Conviene gastar todavía algunas palabras sobre el papel que ha jugado todos estos años la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuyo primer objetivo es «la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad». Esta agencia, como puede suponerse, es enteramente solidaria con toda la ideología de la «calidad» que está acompañando al proceso de liberalización económica. Para hacerse cargo de lo que verdaderamente está en juego en el asunto de la «calidad» es importante notar en qué se distingue de lo que en tono despectivo se ha llamado la «excelencia» (un término tradicional, en realidad muy digno, con el que se nombraba el «buen hacer» en el marco de la academia). Podemos definir la «excelencia» como la *rigurosa adaptación a las exigencias teóricas internas que impone la disciplina científica de la que se trate en cada caso*. Por lo tanto, una evaluación de la «excelencia» solo podrá realizarse desde el *interior* de cada disciplina, pues, evidentemente, solo conociendo

en qué consisten sus exigencias teóricas propias se podrá evaluar en qué medida y con qué grado de profundidad y rigor se están sometiendo a ellas docentes e investigadores. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de conseguir que la Universidad se adapte a las cambiantes necesidades de una «sociedad» imprevisible, a la que supuestamente tiene que «rendir cuentas», es evidente que habrá que buscar un nuevo «patrón de medida» con el que evaluar la actividad universitaria: la «calidad».

Lo que caracteriza al, digamos, «universo calidad» es que no necesita delegar la evaluación de la academia en especialistas de cada disciplina —a los que, más bien, se considera una banda de presuntuosos, merecedores de la mayor desconfianza, corruptos e indolentes que solo persiguen su propio interés pero que se presentan compinchados como depositarios de un no sé qué casi sagrado (y a los que, por supuesto, se trata en consecuencia). Por el contrario, la evaluación se confía a un grupo de rigurosos «especialistas en calidad», expertos en medir parámetros objetivos según criterios externos que garanticen una correcta adaptación a las demandas de la «sociedad». A día de hoy, los parámetros fundamentales de medición de la calidad son los llamados «índices de impacto», cuidadosamente medidos por empresas privadas estadounidenses, entre las que destaca Thomson Reuters, especializada en medir la calidad ya sea de pepinos, hoteles o tesis doctorales sobre Hegel.

La diferencia con la obsoleta lógica de la «excelencia» es palpable. Lo veíamos antes en el parágrafo 1 del capítulo VI. En la tan denostada universidad «humboldtiana»[14] no hay ninguna autoridad más alta que la de *doctor*. La única autoridad más alta que la de *un* doctor son dos doctores, o tres o cinco, discutiendo *en público* en ese escenario que se llama la historia de la ciencia y que tiene por actas las bibliotecas científicas de todo el planeta. A esto se le llama, en efecto, Ilustración. Y al combatir esta Universidad de la Ilustración, no se está abogando por algo más novedoso o más creativo, porque no

lo hay. Durante todos estos años hemos tenido que tragarnos a los ideólogos de Bolonia decir que desde los tiempos de Newton todo ha cambiado excepto la forma de dar clases en la Universidad y que ya era hora de reformar tanta antigualla. Y hemos tenido que aguantar a los pedagogos riéndoles la gracia. Esta «revolución educativa» se ha vendido como un completo cambio de paradigma que –se dice– ha sustituido la «cultura de la enseñanza» por la «cultura del aprendizaje» y ha «enseñado a enseñar a los enseñantes» (prometiéndole la «formación continua» y «a la carta» a lo largo de «toda la vida» y cosas semejantes de las que ya nos hemos ocupado en capítulos anteriores). Pero su verdadero resultado ha sido superar la Ilustración para devolvernos a una oscurísima Edad Media.

Puede que la «forma de dar clase» haya cambiado muy poco desde los tiempos de Newton (seguramente ni siquiera es esto verdad). Pero la verdad que hay muchísimas cosas en este mundo que es mejor que, una vez conseguidas, no cambien. Por ejemplo, las garantías constitucionales, conviene que no cambien con cada legislatura o con cada cambio de gobierno. Hay ciertas garantías que conviene, de hecho, que no cambien nunca: todas las recogidas en la Carta Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Conviene que, una vez conquistado el sistema de garantías judiciales no vengan muchos ocurrentes foucaultianos a mejorarlo, porque invariablemente acaban por inventar el linchamiento (mucho más espontáneo y dinámico, sin duda). Conviene que las conquistas del derecho laboral no cambien todo el rato, sino que se conserven incólumes y estáticas como muros. Conviene, en suma, que no cambien las cosas que son verdad, que son justas o que son bellas. Como somos humanos y muchas veces hemos considerados bellas cosas horribles, o justas cosas injustas o verdaderas cosas falsas, por eso mismo, hay historia de la ciencia e historia del derecho. Pero estas historias, en las que se resumen también el progreso moral de la humanidad, tienen su propio ritmo, que no tiene nada que ver con el de las modas

y los «retos» y «desafíos» de la época. Por supuesto, el mundo de la enseñanza, para empezar porque lo que ahí se administra es un derecho y no un servicio, es de este último tipo. Si cambia, debe cambiar al ritmo del progreso moral de la humanidad, no al ritmo de la eficiencia mercantil o de las fantasías a la moda de los expertos de educación.

EL FUNCIONARIADO Y LA LÓGICA SINDICAL

Pensemos, por ejemplo, en el sistema de acceso a la función pública. Las oposiciones podían ser un procedimiento corrompible o corrompido, pero *había que corromperlo para que lo fuera*, porque la idea no puede ser mejor. Cinco máximas autoridades académicas argumentan y contraargumentan en pública discusión con los candidatos, con las puertas abiertas a la luz de toda la ciudadanía, sobre el valor científico de sus conocimientos. No hace muchísimos años, incluso, lo opositores tenían tiempo ilimitado para defender sus argumentos y el tribunal para rebatirlos o confirmarlos.

Todo ello ha sido actualmente sustituido por el dictamen de unas comisiones que discuten a puerta cerrada, encapuchados como inquisidores y como verdugos del Santo Oficio, consultando *rankings* de impacto mercantil, elaborados por agencias financiadas por corporaciones económicas que no pueden dar la cara porque no la tienen. Esto es, como estamos diciendo, un nuevo feudalismo, pues, en efecto, el feudalismo, el Antiguo Régimen, era, sobre todo, el *reino de lo privado*. Y las empresas privadas no son más que nuevos feudos contemporáneos.

Ya comprobamos en el capítulo II que la misma ceguera disfrazada de progresismo encontramos respecto del asunto del funcionariado en la enseñanza. El sistema de oposiciones (y la idea de que el profesor tiene que ser consiguientemente un funcionario del Estado), en realidad, no es *un* sistema. Es la infraestructura misma de la investi-

gación científica, el más eficaz de los artilugios institucionales inventados para garantizar a la investigación científica unas condiciones materiales de ejercicio público, libre y desinteresado. En realidad, con el tan criticado «sistema de oposiciones» lo que estaba en juego era la definición misma de conocimiento *superior*: la idea, en definitiva, de que *solo la ciencia puede juzgar a la ciencia*. La Universidad es un comunidad de doctores (o de aspirantes a serlo) más arriba de los cuales no puede haber autoridad alguna. No hay ningún exterior a la ciencia desde el que puede juzgarse la verdad de un teorema, la conveniencia de una investigación, la relevancia de un experimento, la idoneidad de un currículum, de un departamento o de un proyecto científico.

También aquí ha habido un malentendido desdichadamente muy celebrado por las izquierdas y que ha hecho mucho daño ya desde los tiempos de la lucha de los PNNs, en los años setenta[15]. Se trata del empeño en imponer sobre la lógica académica una lógica laboral y sindical. Es obvio que los profesores son trabajadores, sin duda, y por tanto, tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, eso está fuera de toda discusión. Pero confundir la lógica académica con la lógica de un ejército laboral ha sido completamente pernicioso. En el caso de la enseñanza, como en el de la justicia y la sanidad, la condición de funcionario es esencial y los contratos de ayudantes, interinos, asociados, etc., tiene que ser siempre provisional y periférica. Un funcionario no es propiamente un trabajador (aunque también lo sea): es, ante todo, un *propietario*, un propietario de su función. Y ello es una condición esencial para el ejercicio libre de su profesión. El no insistir en ello, es decir, la no insistencia en el hecho de que un profesor tiene que ser esencialmente un funcionario, confundiendo así la lógica académica con la laboral, ha creado efectos nefastos incluso laboralmente (no digamos ya académicamente), pues si el profesorado no es más que un ejército de trabajadores, no hay motivo para que no lo sea de traba-

jadores basura, como desdichadamente ocurre en cualquier otro rincón de la sociedad. Humanamente hablando el drama es exactamente el mismo, por supuesto, pero desde un punto de vista académico ocurre que, además, la investigación y la docencia libre y desinteresada pierde una de sus condiciones esenciales, de modo que lo que se pierde por el camino es la noción misma de teoría y, por lo tanto, de «estudio superior».

Desde hace dos décadas, los interinos y asociados microcontratados empezaron a convertirse en legión, las plazas vitalicias se amortiguaron y los contratos se flexibilizaron como en cualquier otro dominio del mercado laboral. El resultado es conocido: en la enseñanza secundaria, el profesor de lengua puede dar gimnasia y viceversa; en la universidad se avanza por el mismo camino a pasos de gigante. De hecho, la propaganda de Bolonia fue alucinante a este respecto: una buena mañana, se abrieron los telediarios con la noticia de que los profesores ya no iban a tener que estar especializados en ninguna disciplina, porque había una empresa llamada Educlick – aún puede buscarse su página en internet– que ofrecía unos *powerpoints* interactivos que, prácticamente, cubrían todo el espacio docente. Era lo que se llamaba una «revolución educativa» sin precedentes.

La subsunción de la problemática académica, anclada necesariamente en el funcionariado, en la problemática laboral-sindical ha sido una constante en el pensamiento de izquierdas, que siempre ha desconfiado del funcionariado, tanto como del aparato de Estado en general. Por eso, las victorias de la izquierda han sido a veces tan perniciosas como sus derrotas. Recordemos la victoria sindical de los profesores no numerarios (PNNs) en los años setenta. El movimiento de los PNN proponía la lógica laboral contra el sistema del funcionariado en la Universidad, al que se consideraba (con razón) corrupto y franquista. Así es que, en lugar de combatir la corrupción y el franquismo, se decidió combatir al funcionariado: una verdadera

avanzadilla «revolucionaria» que, desde los años setenta, anunciaba lo que sería la Universidad actual, con el funcionariado en proceso de extinción. Una vez más, el neoliberalismo hace realidad lo que fueron los sueños de la izquierda.

El resultado, además, fue nefasto ya en aquella época tardofranquista y lo hemos pagado muy caro durante más de treinta años. Finalmente, los PNN lograron una victoria sindical a la que no podían decir que no: se les funcionarizó a ellos también. Se produjo así un desfalco académico que iba a dejar a la Universidad herida de muerte. Sin duda que un puñado de benditos izquierdistas quizás muy sabios además (al menos en comparación con los dinosaurios franquistas que ocupaban las cátedras) se convirtieron así en profesores vitalicios con la consiguiente libertad de cátedra. Pero también ocurrió que, al mismo tiempo, un ejército de inútiles lameculos (precisamente esos que eran un mero efecto de la corrupta endogamia franquista de los catedráticos) se convirtieron también en profesores de por vida. Por una paradoja fatal, la lucha sindical de los PNN acabó convirtiendo en vitalicia la endogamia franquista. Hemos tenido que esperar más de treinta años a que esos señores, funcionarios por mérito sindical, vitalicios sin oposición, que no habían pasado por tribunal alguno ni por ningún control público de ningún tipo, se fueran muriendo o jubilando. Varias generaciones de alumnos tuvieron que aguantarles sorprendidos de que se pudiera ser tan inútil e ignorante. Eran esos señores, precisamente ellos, efecto de una lucha sindical de izquierdas, los que representaban mejor el prototipo de profesor aburrido que recita apuntes amarillentos y que no tiene el menor entusiasmo por su disciplina, en la que, en el fondo es un completo ignorante.

La Universidad, en efecto, ha estado llena de eso. Y una vez más, por una paradoja fatal del destino, la izquierda acepta contar el mundo al revés: el nefando recuerdo de esos ignorantes vitalicios que jamás pasaron por ninguna oposición se presenta ahora como

prueba de lo mucho que hay que desconfiar del funcionariado docente y, *consiguientemente*, del sistema de oposiciones. Y como esos inútiles, evidentemente no sabían enseñar, porque en realidad *no sabían nada de nada que pudieran enseñar*, se plantea que a lo mejor es que es muy importante aprender a enseñar. Se abre así la veda para los pedagogos y se remata la faena. Cada vez que en círculos de izquierda –Podemos no ha sido, como veremos más adelante, desdichadamente, ninguna excepción– se plantea reformar el sistema de acceso a la función docente, se plantea invariablemente que hace falta juzgar si el profesor ha aprendido a enseñar y se insiste machaconamente en que hacen falta metodologías docentes. Y se pone siempre como ejemplo a esos profesores que evidentemente no saben enseñar «aunque sepan mucho de su materia». El arquetipo ancestral de ese «tipo de profesor» es, efectivamente, ese que anegó los cauces académicos de la Universidad durante treinta años y con el que todos, de un modo u otro, nos encontramos durante nuestras carreras universitarias cuando éramos estudiantes. Es, en efecto, un recuerdo indeleble que todos llevamos dentro. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, la asignatura de Estética de quinto de carrera, allá por el año 1980, estaba a cargo de una PNN que justo cuando nosotros esperábamos empezar con cosas tales como la Analítica del Juicio Estético en la Crítica del Juicio, nos sorprendió explicando un catálogo de distintos tipos de pinceles para pintar con acuarela, con óleo o con acrílico, informándonos incluso sobre si era más caro el pelo de marta o el de cerda. Era una especie de monja aficionada a la pintura que probablemente tenía una relación de algún tipo con el catedrático de la asignatura, una especie de bestia franquista que venía de vez en cuando a itocar el piano en el salón de actos! La jugada sindical de las izquierdas fue fenomenal. Para combatir al funcionariado franquista, se logró funcionarizar a sus sacristanes sin control público y sin oposición. Y, tras treinta años de aguardar a que se muriera esa gente, uno se calza las gafas y diagnostica: el pro-

blema es el sistema de oposiciones y que faltan metodologías de enseñanza.

En el capítulo II ya insistimos en el motivo más importante por el que jamás se debería renunciar a exigir la condición de funcionario de los profesores. Los profesores tienen que ser funcionarios por el mismo motivo que conviene que lo sean los jueces: porque esa es la única garantía de su independencia (en el caso de los profesores, de su libertad de cátedra). De la independencia respecto de los poderes fácticos privados y de la independencia respecto del gobierno de turno. En el fondo, se trata de un requisito imprescindible de la separación de poderes, y por lo tanto, de eso a lo que llamamos Estado de Derecho. Es la garantía de la separación entre lo estatal y lo gubernamental. De lo contrario, la enseñanza sería adoctrinamiento gubernamental y la justicia sería un brazo del gobierno. Lo mismo ocurre, en verdad, con la sanidad. Si no hubiera médicos funcionarios, la medicina estaría irremediablemente vendida a los intereses que los gobernantes pudieran tener en los laboratorios farmacéuticos, las casas de seguros o las fundaciones sanitarias privadas.

Por ello, los profesores deben ser vitalicios incluso cuando sean malos profesores. Respecto a esta cuestión hay que tener muy en cuenta la responsabilidad de los tribunales y de las legislaciones que los rigen: impedir que haya malos profesores. También existe, por supuesto, una cosa llamada inspección de servicios, que debería funcionar como tal y no como suele funcionar (volveremos sobre el asunto al final de este libro). Pero un profesor tiene que tener libertad de cátedra y para eso tiene que ser funcionario. En la Universidad, los malos profesores deberían ser sorteables impidiendo que coparan todos los grupos para cursar una asignatura. También pueden habilitarse encuestas entre los egresados (que ya no pueden ser chantajeados) que indiquen la pertinencia de que un profesor se ocupe de una determinada asignatura y que el dictamen tuviera que

ser tenido en cuenta en las juntas de facultad que aprueban la distribución docente. Hay mil ideas posibles, realistas y simples como un cubo. Incluso se podría establecer un sistema de multas a los tribunales que aprueben a inútiles vitalicios. Esto último es una broma, por supuesto, pero es menos risible que la idea, tan común en los ámbitos biempensantes de la pedagogía, de que cualquier inútil podría convertirse en un buen profesor si recibiera el asesoramiento pedagógico adecuado.

Lo que dijimos en el capítulo II sobre el periodismo, convendría recordarlo aquí, invirtiendo el orden de la comparación. Si los profesores no fueran funcionarios, estaríamos vendiendo el universo de la enseñanza a los poderes privados más salvajes, como ocurre en el caso del periodismo (o sin ir más lejos, en el de la enseñanza concertada). En este punto salta a la vista más que en ningún otro cómo la Ilustración retrocede y el Medievo avanza: los periodistas no pueden ser independientes por mucho que se empeñen, porque serán siempre la voz de quien les puede despedir a causa de lo que digan o dejen de decir. Eso es lo que les ha convertido en un ejército de mercenarios. La cosa es gravísima, desde luego, porque con ello hemos vendido al reino feudal de lo privado algo tan consustancial a la Ilustración como es el uso público de la palabra y la libertad de expresión. En cuanto a la enseñanza concertada ya la hemos descrito como un cáncer letal para la enseñanza pública estatal. Al fin y al cabo, se trata de pagar con nuestros impuestos una plantilla de profesores nombrados por el nepotismo privado. De nuevo, la Ilustración retrocede y el feudalismo avanza. Mientras tanto, los niños quedan a merced del totalitarismo doméstico, teniendo que tragar sin remedio con todos los prejuicios ideológicos de sus padres. Es increíble que la izquierda haya tolerado semejante desastre civilizatorio como si fuese algo normal, llegando incluso a apostar por la enseñanza concertada progresista o «autogestionada». Es otro aspecto más de la misma confusión: pretendiendo luchar contra el

Estado y el capitalismo, se acaba por extirpar los pocos vestigios de Ilustración que la clase obrera logró incrustar ahí y se deja incólume, en cambio, lo que el Estado tiene de feudal y, por supuesto, lo que tiene de capitalista.

Este tema es un ejemplo de un problema más general. Porque lo que se puede diagnosticar aquí es una especie de enfermedad congénita de la izquierda: caer como idiotas en lo que podríamos llamar el timo de la estampita. Y encima llamar a eso ser materialista. Los que nos autodenominamos «comunistas» hemos sido expertos en eso. A lo largo de la historia del comunismo ha habido muchas versiones, hasta no dejar títere con cabeza. Como el Estado de derecho era una mera ilusión, los comunistas teníamos que estar contra el Estado y contra el Derecho. Como bajo el capitalismo el parlamentarismo es una tomadura de pelo, los anticapitalistas nos volvimos antiparlamentarios. Como la civilización y el progreso, bajo el capitalismo, no son más que colonialismo e imperialismo, nosotros decidíamos que para ser anticolonialistas había que estar en contra de la civilización y para ser antiimperialistas en contra del progreso. Y lo mismo a una escala más reducida: como las oposiciones estaban corrompidas, en lugar de estar contra la corrupción, había que estar contra el sistema de oposiciones. Como los catedráticos tenían tendencia al nepotismo, en lugar de combatir el nepotismo, se decidía suprimir los catedráticos. Como los catedráticos a veces abusaban de los agregados, en lugar de suprimir los abusos, se optaba por suprimir la distinción entre catedrático y agregado. Como los funcionarios abusaban de los contratados, lo mejor era que todos fueran contratados. Como los profesores abusan de los alumnos, lo mejor es suprimir también esta rígida distinción y que todos aprendamos a la vez jugando juntos al corro de la patata. Siguiendo con esta lógica, en la enseñanza pública podríamos decidir suprimir las sillas y los pupitres porque a veces cojean o las tuberías porque el agua suele tener sabor a cloro. Y aún se podría ir más allá, a título individual: como

los calcetines a veces nos aprietan el tobillo, lo mejor será suprimir los calcetines; y los zapatos, y los calzoncillos... Por este camino, te quedas en pelotas.

Y luego, por supuesto, hay que inventar algo mejor y que inventarlo desde cero. Había que inventar algo mejor que el Estado de Derecho, algo mejor que el parlamentarismo, algo mejor que la democracia representativa, algo mejor que la civilización o que el progreso. Al final, quizás las tribus indígenas tenían una solución para todos nosotros, más allá del derecho, la civilización y parlamentarismo. Podíamos aprender a tocar la flauta, y ya de paso, preguntarle a «cabeza de pimienta» si alguien es inocente o culpable, si conviene pelarnos el pene, amputar los clítoris o lapidar a las adúlteras. A otra escala –y centrándonos en el tema de la enseñanza que aquí nos ocupa–, había también que reinventarlo todo desde cero. Había que soñar un mundo nuevo para la enseñanza. Hace pocos años, por ejemplo, se hizo famoso un pastiche infecto, *La educación prohibida*^[16]. Se trataba panfleto lobotomizado y sobre todo muy mentiroso, porque todas las secuencias que representaban la enseñanza «oficial» habían sido dramatizadas y confeccionadas *ad hoc*, según las necesidades del guion, de modo que los profesores aparecían siempre como bestias autoritarias y los alumnos obligados a una férrea disciplina memorística. «La escuela no sirve y hay que cambiarla, hay que derribarla para empezar de cero», rezaba una de sus presentaciones en sociedad, de gran éxito mediático. Los delirios hippie-progres de este tipo no han tenido barreras: no hay nada que no merezca ser superado o relativizado, la distinción entre profesor y alumno, entre padres y maestros, entre niños y adultos; había que suprimir las tarimas, las pizarras, los pupitres, las cátedras, las asignaturas, la calefacción y las tuberías.

Y lo mejor es que tanto sueño se está haciendo por fin realidad. Dentro de poco en la escuela pública ya no tendremos ni agua caliente ni tuberías ni calefacción. Ya no habrá problemas con que

los funcionarios se corrompan, porque ya no habrá funcionarios, ni con que los catedráticos practiquen el nepotismo, porque ya no habrá catedráticos. Las tan antipáticas y rígidas distinciones entre asignaturas, ya han desaparecido: el profesor de latín es normal que esté impartiendo lengua o matemáticas. En general, los profesores ya no serán un problema. Estarán tan ocupados en un trabajo basura, que los padres tendrán que volver a ocuparse de la educación de sus hijos (los que se lo puedan permitir, por supuesto, aunque no sean muchos). Así es que a base de progresismo, desembocaremos en un analfabetismo, funcional o literal, masivo. Otros tiempos, para una nueva época. Un nuevo campesinado urbano para una nueva Edad Media.

LOS DIOSES DEBEN DE ESTAR LOCOS

Marx decía «un negro es un negro, solo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo», «una máquina de hilar, es una máquina de hilar, solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital». Considerada en sí misma –continuaba diciendo en el mismo texto–, una máquina de hilar libera al hombre de las fuerzas naturales, ahorra trabajo y genera descanso. Bajo condiciones capitalistas, impone al hombre el yugo de la naturaleza, le obliga a un trabajo extenuante y no genera más tiempo libre que el del paro y la indigencia. Uno no alcanza a comprender por qué es tan difícil hacer el mismo razonamiento sobre otros temas: el Estado, el parlamentarismo, las libertades individuales, los tribunales de justicia o, incluso, ¿por qué no?, la policía.

Centrémonos un momento en este último ejemplo, que parece un caso límite. ¿Qué hay que decir de la policía para ser considerado de izquierdas? En un congreso que hubo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense (en el 2011) con el tema «¿Qué es el comunismo?», había un cierto consenso respecto a que en una socie-

dad comunista no habría policía. La policía es un cuerpo represivo especializado en repartir porrazos al pueblo y en meter a gente pobre en la cárcel. En algunos países y situaciones, la policía está implicada en el narcotráfico, el contrabando y la mafia. Ahora bien, esta situación se puede describir de dos maneras distintas: diciendo que la policía está corrompida o diciendo que la policía no hace más que lo que corresponde, puesto que la corrupción es uno de sus atributos esenciales. La cosa se complica si diagnosticamos que hay unas condiciones estructurales, por ejemplo, esas a las que llamamos capitalismo, en las que la policía no puede más que corromperse. O por ejemplo: funcionar al servicio de los poderes fácticos. Aun así, no es lo mismo decir que la policía, allí donde el poder es capitalista, recibe órdenes de capitalistas, que decir que la policía «en sí misma» no puede ser más que un instrumento del capital.

Sin embargo, hay una especie de resistencia «spinozista» –así es como suelen ellos autodenominarse, en la línea de Toni Negri– a traer a colación este tipo de realidades «en sí». Por lo visto, lo materialista sería decir que puesto que los policías son una banda armada al servicio del capital, eso es lo que son y punto, no hay más que decir. Es decir: la policía no solo es una mala realidad, *también es una mala idea*. Por otro lado, ¿para qué hablar de ideas? ¿A cuento de qué empezar a contar cuentos ideales? ¿Sería eso muy materialista?

La verdad, no se alcanza a comprender en qué consiste este materialismo que le tiene tanto miedo a las ideas. La policía no es una mala idea. Eso no quiere decir que no sea una pésima realidad. Es más, si es todavía peor que una pésima realidad, es, precisamente, porque es una buena idea. Si la policía en sí misma no fuera otra cosa que corrupción, no podríamos decir que está corrupta. No resulta tan difícil de imaginar una policía que se dedicara a meter en la cárcel a los banqueros o a los evasores fiscales. La policía tiene que meter en la cárcel a los ladrones, como tenemos claro desde que de niños jugábamos a polis y cacos. Pero lo que no está dicho es que

las leyes tengan que considerar ladrón a Robin Hood y propietario a Rodrigo Rato. La policía es el brazo de la ley: puede ser Rambo, Torrente o el Ché Guevara, depende de cuál sea la ley. En el mencionado congreso sobre «¿Qué es comunismo?», se llegó a decir que en una sociedad comunista no debería haber policías ni para detener a los violadores, porque de eso ya se ocuparían los amigos (o los camaradas o el pueblo o los vecinos o quién sabe si «la multitud» de Toni Negri) No se dijo quién se ocuparía de los amigos (o de los camaradas, el pueblo o los vecinos o la multitud) en caso de ser ellos los violadores[17].

Volvamos ahora a lo que hemos llamado el timo de la estampita. Como el capitalismo convierte este mundo en una pocilga, en lugar de estar contra el capitalismo, estamos contra el mundo. La verdad es que el capitalismo no deja títere con cabeza, ha envilecido todos los aspectos de la vida humana y malversado el sentido de todas las instituciones ciudadanas. La escuela y la sanidad pública[18] son las dos únicas que resisten aún a la lógica del mercado. Y por eso están siendo destruidas. Ante este panorama, lo más estúpido que se puede hacer es colaborar con el capitalismo en su labor destructiva y empezar a derribar o socavar instituciones. Si bajo el capitalismo la democracia se convierte en una farsa, el Derecho en un instrumento del capital, el Estado en una maquinaria de represión, los tribunales de justicia en una ignominia, la policía en un cuerpo de torturadores, el parlamento en un mercado de intereses, los municipios en un nido de corrupción, etc., lo más absurdo que podemos hacer es empeñarnos en que lo ideal sería un mundo no capitalista en el que no existirían ninguna de esas cosas. Eso no es estar contra el capitalismo, es estar contra el mundo. Y es empeñarse, además, en la absurda tarea de construir un mundo nuevo a partir de las ocurrencias de un «hombre nuevo». Esto es pura religión, y en todo caso, al mezclarse con la política, es puro maoísmo o puro fascismo. Resulta extraño que todo esto se pretenda, además, en nombre del

materialismo.

En estos dos últimos años de crisis del bipartidismo, se ha hablado mucho de lo necesario que es poner en marcha un nuevo proceso constituyente y por eso es más importante aún tener en cuenta estas cosas de las que estamos hablando. Habría que cuidarse de ser demasiado imaginativo. La cuestión no es de ningún modo qué sociedad queremos y que vuele la imaginación. Por lo menos algunos de nosotros que nos consideramos de izquierda –aunque a lo mejor somos muy raros–, sabemos perfectamente cuál es la sociedad a la que aspiramos: la que la sociedad moderna ha pretendido ser (sin lograrlo en absoluto, sino todo lo contrario). No aspiramos a una postmodernidad muy imaginativa, sino a una verdadera modernidad, *a la modernidad, al fin y para siempre*: una sociedad de *ciudadanos* libres e iguales, independientes civilmente para elegir ser felices (o infelices) a su modo obedeciendo a leyes que ellos mismos se han dictado. Este sueño moderno, creemos algunos, no es posible más que en condiciones socialistas de producción y, desde luego, se ha demostrado que es absolutamente incompatible con el capitalismo. Para lo que hay que ser imaginativo no es para inventar sociedades, sino para quitarnos de en medio el capitalismo. Hace falta una buena idea para ganar la guerra contra el capitalismo, porque la cosa no pinta nada bien. Una buena idea que nos permita cambiar la correlación de fuerzas, eso es lo que necesitamos. Pero, desde luego, lo que sí que *no* necesitamos es una idea mejor (o más creativa o flexible) que la enseñanza pública estatal, los tribunales de justicia, el parlamentarismo o la separación de poderes. El único «hombre nuevo» que necesitamos, fue ya pensado hace mucho y muy bien pensado: es el *ciudadano*.

El pensamiento de izquierdas suele rasgarse las vestiduras cuando algunos que también somos de izquierdas afirmamos que la teoría del Estado Moderno no está tan mal pensada, que es, incluso una idea muy buena. Al decir esto no estamos defendiendo los Estados

Naciones existentes, sino todo lo contrario, lo que estamos haciendo es denunciar que esos Estados realmente existentes no se parecen en nada a la teoría (y que además algunos se parecen menos aún que otros). Sobre todo por una razón: jamás se dan las condiciones para que esos «artilugios institucionales» que en el Estado moderno tiene por función, dividir el poder, proteger el uso público de la palabra, blindar la presunción de inocencia, etc., funcionen de verdad, porque siempre ha habido un poder salvaje más potente, el capitalismo. Podemos dividir el poder político cuanto queramos, garantizar la independencia del poder judicial, proteger la inmunidad de los parlamentarios, otorgarles libertad de expresión en la cámara, proclamar a los cuatro vientos que todo el mundo es libre de decir lo que quiera sin censura, podemos hacer esto y muchas cosas más y no estaremos haciendo nada si lo que ocurre –y esto es lo que ocurre– es que el poder real está en otra parte. Entre nosotros, el poder político no tiene el poder. La economía es un poder salvaje infinitamente más potente, que actúa masivamente al margen de la ley y que tiene, además, poder más que suficiente para chantajear cualquier actividad parlamentaria, así como de comprar cualquier medio de expresión ciudadana. Pero el verdadero reto es someter los poderes económicos al imperio de la ley del parlamentarismo, no tomarla contra la ley y el parlamentarismo para dejar incólume el imperio económico.

Bien es verdad que se ha pretendido que el Estado no ha sido más que un instrumento en manos del capital. No cabe duda: las dos cosas surgen sospechosamente a la vez. Pero hay que pensarlos por separado, porque surgen a la vez, pero *con un montón de derrotas de por medio*. No se puede decir que la Revolución francesa se materialice en el triunfo del capitalismo, hay un montón de derrotas intermedias hasta que salió triunfante aquello que beneficiaba a la burguesía y al liberalismo económico. Una determinada versión del Estado Moderno fue derrotada, fue guillotizada con Robespierre.

Para empezar, es falso que –como se dice a menudo, sobre todo entre autores marxistas– Robespierre hablara en nombre de la burguesía triunfante. Robespierre –como nos demuestran Florence Gauthier o Toni Domènech[19]– es más bien la continuación de una revolución antifeudal y anticapitalista que había comenzado en Europa con las revueltas campesinas del final del medievo. Robespierre fue quien introdujo el concepto de «fraternidad» en el lema de la Revolución francesa. La «fraternidad» exigía extender la independencia civil al conjunto de la población, era el proyecto de una ciudadanía universal. Había que empezar por liberar a los esclavos (y también algo que se mencionaba poco: liberar a la mujer). Pero también había que garantizar las condiciones de existencia de toda la población, campesina u obrera. Extender la independencia civil al conjunto de la población es, para la parte derrotada de la Revolución francesa, la condición de un Estado verdaderamente moderno contra el Antiguo Régimen.

Pero ese proyecto es derrotado. Y lo que no se puede hacer es absorber todo esto en el triunfo final de la burguesía. Eso es un disparate. Igual que se suele decir que la Revolución francesa representa el triunfo de la burguesía, se podría decir que la burguesía triunfó contra la Revolución. Lo mismo que se dice que el Estado Moderno es el Estado burgués, podríamos decir que la burguesía enterró la posibilidad de un determinado Estado Moderno, precisamente ese en el que podría «imperar la ley», es decir, ser un auténtico «estado de derecho». En lugar de todo eso tenemos una dictadura económica que a veces y en determinados momentos y lugares suficientemente privilegiados, ha podido disfrazarse con los ropajes del derecho y el parlamentarismo.

En distintos sitios hemos defendido que es mejor plantearlo así[20], porque de lo contrario, si todo es capitalismo, si el Estado Moderno no es más que la cobertura del capitalismo, entonces, al combatir el capitalismo estamos combatiendo también el Estado

Moderno, con lo cual abominamos de la división de poderes, del parlamentarismo, del estado de derecho, etc., y encima nos abocamos a la insensata tarea de inventar algo mejor que todo eso. Al final, acabamos superando al «ciudadano» para sustituirlo por el «camarada», el «hombre nuevo», o algo semejante; algunas de estas ocurrencias han tenido plasmaciones históricas abominables.

Y además... ahora mismo es estratégicamente ruinoso arremeter contra el Estado, justo cuando el salvajismo neoliberal, los teóricos del mínimo Estado (que sin embargo no son tan tontos como para no guardarse las espaldas con el Estado que les conviene) están dismantelando la seguridad social, la escuela pública, el derecho laboral. Porque no hemos de olvidar que todas las conquistas de siglos de lucha obrera se han ido incrustando y consolidando como legislaciones estatales. Acabar con el Estado hoy en día sería como dejar a la clase obrera en pelotas. En cambio, la burguesía se las arreglaría muy bien con sus policías privados y sus ejércitos mercenarios.

Los defensores de la escuela pública en la «marea verde», lo mismo que el movimiento estudiantil que luchó contra Bolonia, no han caído en esta trampa. Han sido muy conscientes de que estaban intentando salvar la dignidad de una institución –la enseñanza pública estatal– de la voracidad salvaje del capitalismo.

Finalmente, ya a comienzos del siglo XXI, se empiezan a aclarar algunas cosas. El capitalismo no solo no nos trajo las instituciones republicanas defendidas por los pensadores políticos de la Ilustración, sino que siempre fue incompatible con ellas. Y con el tiempo, no ha ido más que acrecentándose esta incompatibilidad. El resultado no puede ser más que lo que ya tenemos casi encima: una nueva Edad Media, un nuevo feudalismo.

El ritmo del medievo venía jalonado por las festividades religiosas. Teóricamente, nuestra respiración política tiene el ritmo de las elecciones democráticas. Votamos cada cuatro años, supuestamente, para aportar nuestras razones. Pero la economía capitalista tiene sus

propias razones. Y no suelen coincidir con las nuestras. Lo que para nosotros es una solución, para la economía suele ser un problema. Y lo que para la economía son soluciones, para nosotros son problemas. Nos ajustamos nosotros para bien de la economía. Y poco a poco –sobre todo cuanto más hemos sido derrotados en la lucha sindical– hemos acabado por comprender que más nos vale así. Porque si a la economía le va mal, para nosotros es aún peor, ya que dependemos a vida o muerte de esa misteriosa señora. Así es que no votamos para aportar nuestras razones, sino para entrar en razón. Para que no se nos ocurra votar insensateces que contradigan la voluntad de los dioses. En estas condiciones, la democracia es muy parecida a la religión. Con su voto, la población festeja lo que la economía ya ha votado por su cuenta. El día de las elecciones nos juntamos para celebrar que los dioses tienen sus buenas y sabias razones, aunque nos sea difícil comprenderlas. Y, normalmente, votamos en consecuencia.

Hemos vuelto a la Edad Media, pero a una Edad Media exagerada y asfixiante, desproporcionada, insaciable. Probablemente, el ser humano nunca ha sido tan siervo de un señor, nunca ha estado tan expuesto a los caprichos tiránicos de un amo, como actualmente. En los libros de Historia se suele decir que el siervo de la gleba era fundamentalmente religioso, como si su paso por este mundo no tuviera otro sentido que estar a la espera de una vida más allá. El campesino medieval, se dice, vivía consagrado a su dios, pendiente de su dios, deseoso de complacerle haciendo diariamente sus deberes... O sea, exactamente lo mismo que hoy día ocurre con los mercados. «Hacemos los deberes» –como dice Mariano Rajoy– para calmar la ira de los mercados, para infundirles confianza, para prometerles ser buenos en el futuro con los recortes y los planes de ajuste, para que no cambien de opinión y aumente la prima de riesgo, para que no se calienten demasiado, para que no se enfríen, para que no se constipen.

Recordemos otra vez las palabras de Monti: los mercados ya no son compatibles con la pretensión de vivir varios años en el mismo sitio y que eso debería parecernos, incluso, divertido. Los campesinos de la Edad Media, a menudo, no salían de su pueblo en toda su vida. Hoy la voluntad de los dioses nos quiere nómadas, pero nómadas sin familia, sin hijos, sin religión, sin lastres culturales, sin nada más que lo puesto para poder correr ligeros aquí y allá, según los mercados nos vayan necesitando. Ante todo, hay que cumplir con la voluntad del mercado. Y todo es en vano: los mercados están como una cabra. Jamás un dios ha estado tan loco para cambiar de opinión cada mañana, cada minuto, incluso cada milésima de segundo. Los mercados de futuros y derivados financieros sí, están mucho más locos y son mucho más imprevisibles que Nerón o Calígula. Y además tienen mucho más poder. Incluso lo de Sodoma y Gomorra puede ser una broma comparado con un hundimiento general de la confianza en los mercados. Si perdemos la confianza de los dioses, no hay nada que hacer. Los economistas tertulianos hablan, por eso, un lenguaje completamente religioso: hablan de la sangre de los mercados, de cómo hay que hacerla circular, por cierto, bombeando la sangre con sacrificios humanos. Pero los dioses son insaciables: aún hacen falta más sacrificios, siempre hacen falta más sacrificios. En suma: jamás en la Historia y bajo ninguna religión, la población ha vivido tan constantemente pendiente de un Más Allá. Los dioses solían ser bastante estables. Es cierto que Jehová era algo celoso y tenía mal carácter, pero nunca en las proporciones actuales. Los judíos de Moisés o David no se levantaban todos los días temblando de miedo y corrían a mirar el periódico para consultar la prima de riesgo sobre el humor de Jehová. Se suponía que era un dios exigente, pero no que fuera un demente.

Es un disparate pretender que esta servidumbre absoluta hacia un amo chiflado, habría parecido a Kant, Rousseau o Hegel compatible con esa condición a la que llamamos *ciudadanía*. Aquí habrían reco-

nocido más bien un nuevo Antiguo Régimen, pero mucho más oscuro, opaco y criminal. La imagen es estremecedora: todas las instituciones republicanas, todas las instituciones edificadas por el impulso de la Ilustración, hincadas de rodillas ante los imperios privados. Esto es, para el caso que nos ocupa ahora, lo que verdaderamente significa eso de poner a la Universidad «al servicio de la sociedad». Una institución pública se rinde así frente al feudalismo.

Es importante resaltarlo. Si decimos que esto que vivimos, por ejemplo en Europa, no es un Estado de derecho no lo hacemos para expresar nuestra opinión de furibundos comunistas antisistema. Tampoco porque seamos unos idealistas que hablan de quimeras sin querer mirar a los ojos la cruda realidad de los «estados de derecho» realmente existentes. Lo que decimos es que son *los propios filósofos* gracias a los cuales hemos entendido lo que significa esa fórmula –«estado-de-derecho»– los que se negarían a reconocerla en esos estados realmente existentes. Sócrates, Platón, Rousseau, Kant, Hegel, creemos que se escandalizarían al ver a nuestros políticos afirmar que en España, Francia, Alemania o Grecia vivimos bajo el «imperio de la ley», en «estado de derecho». Y no es porque seamos estados de derechos muy imperfectos, es que no tenemos nada que ver con ese proyecto político. Vivimos en una sociedad capitalista. El capitalismo es un sistema de producción en el que la población en general carece de medios de producción para subsistir por su cuenta o, lo que no es sino la otra cara de la moneda, un sistema en el que la mayor parte de la población tiene que buscarse la vida –vender su fuerza de trabajo– en el mercado laboral, a cambio de un salario. En este mercado laboral, la gente se ve obligada a trabajar en lo que sea, al precio que sea, para producir lo que sea, en la cantidad que sea y de la manera que sea, es decir, la gente está vendida a vida o muerte a una lógica de producción que se determina a sus espaldas y, además, actualmente, de forma cada vez más misteriosa incluso para los economistas más pretenciosos, en ese mundo del sinsentido y lo

imprevisto al que llaman «los mercados». Esto no es un «imperio de la ley», sino una dictadura capitalista. Esto no es la realización del monstruo soñado por la Ilustración. Es la pesadilla a la que nos vimos abocados cuando la Ilustración fue derrotada. Institucionalmente, hemos regresado a la Edad Media. Antropológicamente, en cambio –es lo que Santiago Alba y yo intentábamos explicar en *El naufragio del hombre*, pero no es el momento de entrar ahora en el tema–, hemos ido mucho más allá: hemos regresado a una prehistoria anterior a la revolución neolítica.

[1] Sobre esta deriva foucaultiana me he explicado con más detenimiento en Jacobo Muñoz y Pablo López (coords.), *La impaciencia de la libertad*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, capítulo 7: «Panoptismo y estado de derecho: una reflexión sobre las posiciones políticas de Michel Foucault», pp. 223 ss.

[2] Cfr. Círculo de Empresarios, *Una Universidad al servicio de la sociedad*, Madrid, 2007.

[3] Todavía recordamos al por aquel entonces presidente de la CRUE, Ángel Gabilondo, suplicando a la ministra del momento: «Bolonía no se puede aplicar coste cero, compréndalo». Luego le nombraron a él ministro.

[4] Personal Docente Investigador.

[5] W. Halffman y H. Radder, «Manifiesto académico: de la Universidad ocupada a la Universidad pública» (disponible en <<https://es.scribd.com/document/318746057/Manifiesto-Academico-Par-La-Universidad-Publica>>). Hay que agradecer muchísimo a la profesora Eva Aladro Vico la traducción de este documento imprescindible.

[6] *Ibid.*, p. 4. Cfr. R. Abma, *De publicatiefabriek* [La fábrica de publicaciones], Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2013.

[7] *Journals under Threat: A Joint Response from HSTM Editors*, 2008.

[8] Cfr. Klaas Landsman, «It's all about the bucks, kid. The rest is conversation», *Ethos of Science Lecture*, 8 de mayo de 2013.

[9] W. Halffman y H. Radder, «Manifiesto académico: de la Universidad ocupada a la Universidad pública», cit., p. 6.

[10] *Ibid.*, p. 8.

[11] *Ibid.*, p. 8.

[12] *Ibid.*, p. 10.

[13] *Ibid.*, p. 11.

[14] Es interesante, por cierto, leer un poco sobre el tema. Cfr.: W. Humboldt, «Sobre la organización interna y externa de las instituciones científicas superiores en Berlín»,

Logos. Anales del Seminario de Metafísica 38 (Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, 2005), pp. 283-291.

[15] Los PNN eran los «profesores no numerarios» que, en los años setenta protagonizaron una lucha contra la Universidad franquista. Ya hemos comentado algo sobre el tema en la nota 24 del capítulo II. Sobre este tema es muy interesante el libro *Por una Universidad democrática* de Francisco Fernández Buey, Barcelona, El Viejo Topo, 2010.

[16] <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/25/actualidad/1348597598_771130.html>.

[17] Sin duda, los violadores pueden ser, precisamente, los policías. Incluso, como ha ocurrido tantas veces, los policías pueden ser sistemáticamente violadores y torturadores. En ese caso, lo que tenemos no es solo un crimen muy grande. Lo que tenemos es un orden político intolerable.

[18] Y en un estado de deterioro que ofende a la vista, la justicia.

[19] Como ya he comentado más despacio en *¿Para qué servimos los filósofos?* (cit.), lo mejor para este tema es leer a Florence Gauthier o *El eclipse de la fraternidad* (Barcelona, Crítica, 2004) de Toni Domènech.

[20] En *El orden de El capital* (cit.) hemos discutido este planteamiento en conexión con una interpretación de la obra de Marx.

